

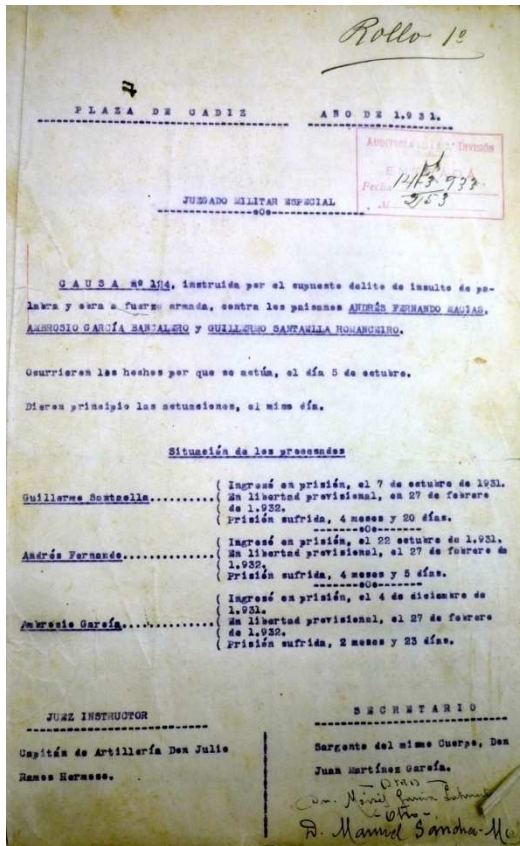
El mito del atentado al coronel Varela y la represión golpista del anarcosindicalismo gaditano (1931-1938)

José Luis Gutiérrez Molina

Grupo de Trabajo «Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía»

1. Los límites del reformismo republicano	2
2. La huelga general del 5 de octubre de 1931	5
3. La Causa 124 de 1931	13
4. El auto del juez Ramos Hermoso	25
5. El Consejo de Guerra	30
6. Los hombres de acción del anarcosindicalismo gaditano	37
7. El Procedimiento Sumarísimo 245/37	42
8. Fuentes y bibliografía	45

La desinformación sobre los acontecimientos ocurridos durante los años de la Segunda República y tras el golpe militar sigue siendo enorme. Tan grande que han terminado por considerarse como verdaderos sucesos que están recubiertos por una espesa capa de mitos. Muchos de ellos creados de forma interesada. A medida que disponemos de nuevas fuentes de información podemos acabar situando en su justa medida a algunos de ellos. Este es el caso del supuesto atentado que el coronel José Enrique Varela Iglesias sufrió en la plaza del compás de Santo Domingo de Cádiz la mañana del lunes 5 de octubre de 1931. El día en que una huelga general paralizaba casi por completo la vida de la ciudad. Muchos de los militantes obreros que fueron detenidos entonces serían asesinados tras el golpe de Estado de julio de 1936. Yo mismo lo di por cierto en mi tesis doctoral escrita hace más de veinte años. Ahora estamos en condiciones de situar los hechos en su justo término y conocer el destino de muchos de sus protagonistas.



Figuras 1 y 2. A la izquierda portada del sumario de la Causa abierta para depurar la huelga del 5 de octubre de 1931 y el supuesto atentado contra José Enrique Varela Iglesias (a la derecha), coronel del Regimiento de Infantería nº 27 de Cádiz.

1. Los límites del reformismo republicano

Fueron muchas las expectativas que levantó la proclamación de la Segunda República. Tanto en el mundo de las clases medias como en el de las populares. La desaparición de la monarquía significó la recuperación de la participación pública democrática y un cambio de las políticas económicas de la Dictadura que habían llevado al país a una más que difícil situación. Las organizaciones partidarias y sindicales se habían ido recuperando desde hacía más de dos años y, durante la primavera de 1931, su expansión fue meteórica. Pero no fueron sólo el reformismo republicano y la socialdemocracia obrera los que ocuparon los espacios administrativo, político y sindical de la sociedad española. Junto al Partido Republicano Radical, el más veterano y estructurado en 1931, el reformismo republicano acogió a otros grupos como la Acción Republicana de Manuel Azaña o el difuso mundo del Partido Republicano Radical Socialista. Incluso tenía su espacio la extrema izquierda burguesa del republicanismo federal o aquellos que, desde muy pronto, comenzaron a denunciar la pervivencia de las viejas prácticas caciquiles monárquicas.

También en el mundo popular, y en el obrero en particular, el panorama terminó dibujándose de una forma mucho más compleja de lo que hubieran deseado los firmantes del Pacto de San Sebastián del verano de 1930. Si en el campo partidario la «pata obrera» era el Partido Socialista, en

el sindical se había pensado en que la UGT se convirtiera en la fuerza que aglutinara al proletariado español. Frente al panorama europeo, en el que socialdemócratas y comunistas se repartían la presencia mayoritaria, en España continuaban presentes las dos ramas herederas directas de la Primera Internacional: la anti-autoritaria, que había cuajado en el anarco-sindicalismo de la CNT y la ligada a la socialdemocracia.

El nuevo régimen tenía que dar satisfacción a una serie de demandas económicas y sociales de tanta o mayor importancia que las participativas. Amplios sectores de la sociedad española estaban afectados por la crisis interna y las consecuencias de la depresión internacional de 1929. A las expectativas de recuperación de mejoras laborales y de la capacidad adquisitiva perdida durante la Dictadura se le unió el problema de un cada vez mayor número de trabajadores en paro. Fueron esos sectores los que nutrieron las filas de los sindicatos cenetistas que ya habían demostrado su eficacia una década antes. Unos días después de los sucesos gaditanos, entre el 13 y 17 de octubre de 1931, la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía y Extremadura celebró su primer congreso en Sevilla con la asistencia de más de doscientos delegados representantes de 317.672 trabajadores. De ellos 50.250 estaban en paro. No se trataba sólo de una batalla laboral.

Durante la primavera y el verano de 1931 el reformismo republicano se encontró en la tesitura de decidirse entre empujar, o no, decididamente su programa reformista frente a las resistencias de los sectores más reaccionarios, y apoyarse, o no, en los sectores más decididamente transformadores que iban, en muchos casos, más allá de las aspiraciones y los ritmos de la conjunción republicano-socialista. Un dilema que el primer gobierno provisional no terminó de dilucidar de forma clara. Por ejemplo, se mostró excesivamente conservadora en cómo afrontar el orden público. Una de las cuestiones en las que debía marcar sus diferencias con la monarquía. Sin embargo, los nuevos dirigentes políticos, muchos de ellos procedentes de las propias estructuras monárquicas, continuaron tratando las cuestiones sociales bajo un prisma eminentemente de orden público. También la presencia socialista en el gobierno, y en numerosos ayuntamientos, fue un arma utilizada no sólo para desarrollar su proyecto reformista sino también para expulsar del espacio sindical al molesto competidor que le había salido.

Una indecisión que no contentó a nadie y que fue aislando al gobierno republicano. Ni la reacción española abandonó sus proyectos golpistas puestos en marcha desde las primeras semanas, ni las reformas y su ritmo terminaron por satisfacer ni a radicales ni incluso a algunos sectores del propio socialismo. El resultado fue que a la constante violencia política, tan arraigada en la historia contemporánea española, se le añadieron las tensiones generadas por las demandas sociales y la competencia sindical. De hecho, el ejercicio de la violencia no había sido rechazado por las propias fuerzas ahora en el gobierno en fechas muy cercanas. Recuérdese, por ejemplo, la insurrección de Jaca. El resultado fue que el monopolio estatal del uso de la violencia no sólo era discutido teóricamente sino también en la práctica. La respuesta estatal, como en épocas anteriores, fue prioritariamente represiva. Así, como ocurrió en octubre de 1931 en Cádiz cuando la declaración de una huelga general limitada, en cuyo transcurso se produjeron manifestaciones violentas, fue considerada como un hecho revolucionario.



Figuras 3 y 4. A la izquierda alegoría de la Segunda República, «La Niña». A la derecha el gobierno provisional durante cuyo mandato tuvieron lugar los hechos narrados en el texto.

En octubre de 1931 ya se habían producido diferentes episodios que habían puesto de manifiesto un cada vez mayor endurecimiento de la respuesta represiva gubernamental. Muy lejos quedaban ya las palabras de Manuel Azaña en mayo de 1931, cuando una oleada de furia anticlerical afectó a diversas ciudades, entre ellas Cádiz, proclamando que los conventos de Madrid no valían la vida de un republicano. Unos días antes de los incendios, el mitin de la CNT en Barcelona del 1º de mayo había terminado en un intenso tiroteo con el saldo de un muerto y decenas de heridos. En julio, un conflicto parcial en una fábrica cervecera de Sevilla terminó convirtiéndose en una huelga general con sangrientos enfrentamientos entre afiliados de diferentes sindicatos, las fuerzas de orden público y del ejército y la actuación de bandas paramilitares de extrema derecha. Éstas asesinaron a cuatro obreros en el Parque de María Luisa. Algunos de sus miembros tendrían un destacado protagonismo en el triunfo del golpe de Estado de julio de 1936 y ocuparían importantes puestos en el aparato represor.

La huelga de la Compañía Nacional Telefónica fue, a escala nacional, otro hito en el enfrentamiento. Mostró que las nuevas autoridades olvidaban sus promesas reformistas. Para el nuevo ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, la actuación de la ITT norteamericana, no reconociendo la actuación sindical, no era ya propia de considerar a España una colonia de negros. La huelga que comenzó de forma pacífica terminó adquiriendo rasgos violentos con numerosos actos de sabotaje.

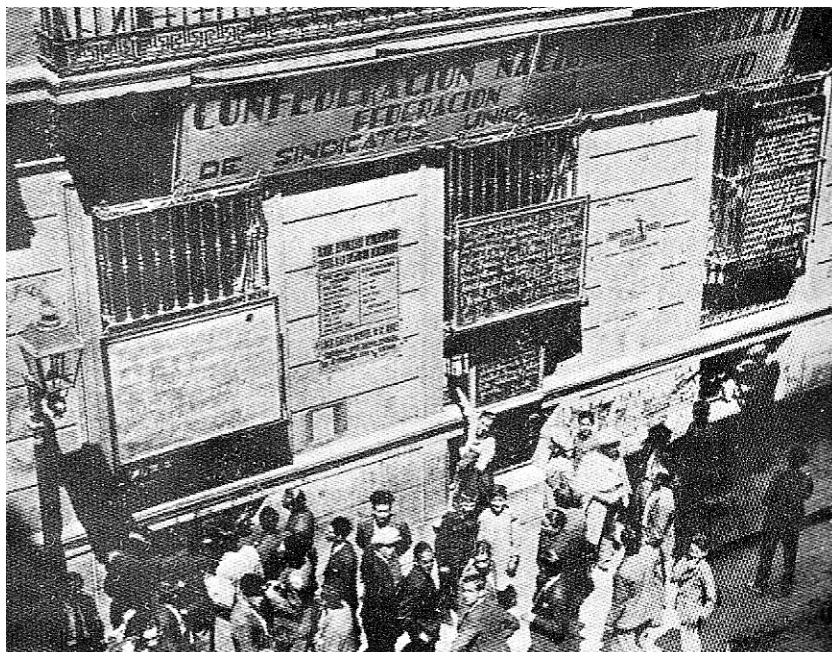


Figura 5. Huelguistas de la Compañía Telefónica leen las noticias de las pizarras del local de la CNT en Madrid.

No fue el sindical el único campo en el que se enfrentaron el reformismo republicano y los sectores radicales de la sociedad española catalizados, fundamentalmente, por una CNT reaparecida vigorosa tras casi diez años de clandestinidad. Otro fue el de las reivindicaciones sociales como el abaratamiento de las subsistencias, la rebaja del precio de los alquileres y la paralización de los desahucios. Una lucha en la que el anarcosindicalismo tenía una cierta tradición. Baste recordar la creación de las Ligas de Inquilinos en los años finales de la década de los diez que tuvieron una importante presencia en ciudades como Sevilla o Barcelona. Fue precisamente en la ciudad catalana en donde, en la primavera de 1931, nació una Comisión de Defensa Económica (CDE) cuya finalidad era la rebaja de los precios de alquileres y subsistencias. En Cádiz se creó otra en el verano. La entidad que, con el apoyo de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Cádiz y de otras sociedades de la UGT y Autónomas de la ciudad convocó, una vez fracasadas sus gestiones ante las autoridades gubernativas y patronales, una huelga general de 24 horas para el lunes 5 de octubre.

2. La huelga general del 5 de octubre de 1931

Nadie dudaba en Cádiz que la CDE estaba impulsada por el anarcosindicalismo local. De hecho, de los seis miembros que componían la comisión tres eran conocidos militantes libertarios, algunos de ellos con una larga trayectoria: José Bonat Ortega, Clemente Galé Campos y Antonio Carrero Armario. Las otras tres eran mujeres: Carmen Forero, Isabel Ruiz y Nieves Gavira. Una muestra del protagonismo femenino en la aparición de la entidad. De hecho, la CDE nació de una manifestación de más de un centenar de hombres y mujeres ante el local de la CNT en la plaza de Castelar. Durante varias semanas se sucedieron la recogida de firmas, las entrevistas con las autoridades, el reparto de panfletos y la convocatoria de mítines. Apenas consiguieron que el gobernador Gabriel González Taltabull se comprometiera en rebajar el precio de la carne de cerdo y gestionar una entrevista con la directiva de la Cámara de la Propiedad que se negaba a recibirlos. Poca cosa cuando lo que se planteaba era una rebaja significativa de los precios de los alimentos básicos y del 10% de los alquileres.



Figuras 6, 7 y 8. De izquierda a derecha José Bonat Ortega, cenetista y miembro de la CDE, Gabriel González Taltabull, gobernador civil y vista actual de la plaza de las Viudas donde se encontraba el local de la CNT en el que se celebraron los actos de la CDE.

La campaña tuvo su cenit el viernes 11 de septiembre. Ese día, un acto celebrado en el local cenetista de la plaza de las Viudas congregó en el salón y en la calle a más de cuatro mil personas. A partir de ese momento González Taltabull comenzó a poner trabas a las acciones de la CDE. Jerezano de nacimiento y formado en la política sevillana, pertenecía al radicalismo y era seguidor de Diego Martínez Barrio. Finalmente fue convocada la huelga para el lunes 5. El acto que el domingo querían celebrar los convocantes para movilizar a la población fue prohibido.

En cualquier caso, según la prensa local, la huelga fue un éxito. Desde primeras horas de la mañana numerosos grupos de trabajadores se concentraron en los lugares claves de la ciudad. El barco hacia Matagorda, el astillero al otro lado de la bahía, no salió ni tampoco entraron a trabajar los obreros del de Cádiz. Las tareas portuarias se fueron paralizando así como las de las otras grandes industrias de la ciudad: Construcciones Aeronáuticas y la Fábrica de Tabacos. Prácticamente todo el comercio cerró salvo algunos cafés y bares. Hacia las once de la mañana la Guardia Civil comenzó a disolver los grupos concentrados en la plaza del ayuntamiento. Muchos de los desalojados se dirigieron a la calle Sopranis. Otros marcharon por la de Plocia. Desde una azotea fue lanzado un adoquín contra el cable del fluido eléctrico del tranvía que comunicaba la ciudad con Extramuros. Cayó al suelo cortando la circulación. Un convoy fue apedreado y la Guardia Civil cargó.



Figura 9. Edición del martes 6 de octubre de uno de los diarios locales dando cuenta del éxito de la huelga.



Figura 10. Plaza del Ayuntamiento de Cádiz, llamada de la República, en 1931 donde comenzaron los incidentes con su desalojo por la Guardia Civil

A partir de este momento las versiones difieren según las fuentes. Para las autoridades fue el momento en que comenzaron a actuar diferentes grupos de pistoleros que hicieron uso de sus armas contra las parejas de guardias civiles estacionadas ante la iglesia de santo Domingo para controlar la salida hacia la Cuesta de las Calesas. Por el contrario, para los convocantes de la huelga fueron los guardias los primeros que dispararon al verse agredidos por una lluvia de objetos lanzados desde las casas, mientras que eran insultados. En cualquier caso lo cierto es que comenzó un tiroteo que las autoridades calificaron de intensísimo. Quizás no lo suficiente para provocar heridos o muertos. De hecho, según las informaciones del hospital de San Juan de Dios, fueron cuatro los heridos. Todos leves y por disparos de las fuerzas del orden. Sólo el teniente Juan Riaño Castro, que acompañaba al coronel José Enrique Varela, lo fue por los pistoleros. De la gravedad o levedad de sus heridas hubo divergencias e, incluso, se llegó a dudar de que, realmente, fuera herido. Lo veremos más adelante.

Al poco de iniciarse el enfrentamiento en el compás de santo Domingo los disparos comenzaron también a oírse en el lado más alto de la cuesta de las Calesas. En la Puerta de Tierra, a cuyos laterales se encontraban los cuarteles de san Roque y santa Elena ocupados por las unidades del Regimiento de Infantería nº 27 de Cádiz. Otro lugar estratégico de la ciudad. La única puerta de entrada y salida de la isla con el istmo que la une al continente. Por un angosto portillo, mediante señales, cruzaban los tranvías custodiados por soldados. Desde primeras horas de la mañana se habían concentrado allí fuerzas de la Guardia Civil y reforzadas las guardias. La tropa estaba acuartelada por si era necesaria su intervención.



Figura 11. Fotografía de Leonardo publicada en *Diario de Cádiz* de 6.10.1931 con la llegada al teniente Riaño al hospital de San Juan de Dios.



Figura 12. Una de las fotografías incorporadas al sumario con los balcones desde donde supuestamente se agredió al cuartel de santa Elena.

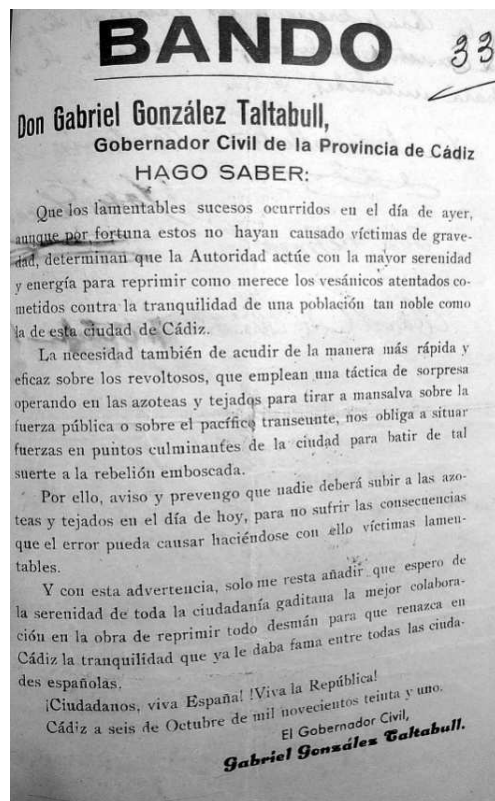
De nuevo se habló de intenso tiroteo contra los cuarteles desde las azoteas y algunos balcones de las casas situadas frente a ellos. También, a pesar del número de disparos, los únicos heridos fueron paisanos y las fotografías de los edificios tiroteados muestran los mayores daños en los edificios contra los que se dispararon desde los cuarteles. Incluso hubo vecinos que aseguraron que nadie había disparado desde sus casas. De hecho no hubo detenidos por estos incidentes. Al día siguiente un diario vespertino, *El Noticiero Gaditano*, el cronista de la jornada escribió que el viento, al sonar los disparos y reproducir el eco, hizo creer que el tiroteo se producía por todas las partes de la ciudad.

A medida que avanzó la tarde los incidentes se fueron espaciando. Unos disparos sonaron por la periferia del barrio de La Viña, por la zona del Campo del Sur donde se encontraban las fábricas de cervezas y de hielo. Los transeúntes se recogieron en sus casas y cierros y ventanas quedaron cerrados. Bastó la llegada de algunas parejas de guardias civiles para que renaciera la calma. En la calle Plocia unas quince personas subieron las escaleras de una casa hasta la azotea, rompieron la puerta y comenzaron a arrojar piedras contra los tranvías. Más tarde, cerca del cuartel de santa Elena, un teniente recibió una pedrada.

Cuando se conocieron los enfrentamientos, el gobernador ordenó la inmediata clausura de los dos centros más importantes de la CNT, los situados en las plazas de Castelar y de Fernando García de Arboleya, más conocida como de las Viudas, y el del pequeño sindicato autónomo de Oficios Varios ligado al Partido Comunista. Para entonces ya se habían producido las primeras detenciones que, finalmente, serían treinta y una. A la vez soldados y guardias civiles se apostaron en las torres del Ayuntamiento y de la Puerta de Tierra para dominar las azoteas. Aunque la demostración de fuerza más importante se produjo ya anochecido. La ciudad continuaba en calma aunque numerosos grupos continuaban estacionados en las calles. Se había decidido dar un escarmiento a los barrios que habían protagonizado los incidentes más graves, incluido el supuesto atentado a Varela. De acuerdo con las autoridades gubernativas y el comandante militar de la plaza, el coronel Julio Mena Zueco, el coronel Varela ordenó salir dos compañías de su regimiento, provistas de armamento, que se dirigieron hacia el Ayuntamiento. Allí también se concentraron fuerzas de la Guardia Civil y agentes de vigilancia al mando del comisario jefe de la ciudad, Miguel Leal de Ibarra.

Reunidas todas las tropas rodearon los barrios de Santa María y la Merced. En cada esquina dos soldados y un cabo, en cada manzana un sargento. Al advertir los movimientos los grupos de personas que estaban en la esquina de la calle san Francisco comenzaron a abuchear. Una carga de la Guardia Civil los dispersó. Desplegadas las tropas, los agentes de Vigilancia y guardias civiles se adentraron en las calles para registrar casa por casa. La zona quedó sellada, Nadie podía entrar o salir. Durante dos horas el barrio fue minuciosamente registrado sin mucho resultado a juzgar la falta de noticias en la prensa y de referencias en la instrucción sumarial abierta con motivo de lo ocurrido. Después se permitió a los vecinos entrar y salir previo registro y cacheo.

Terminado el peinado del barrio, el gobernador civil, en compañía del diputado Manuel Muñoz Martínez, jefes de las fuerzas de orden público, policías y algunos periodistas cruzaron sus calles hasta llegar al cuartel del Regimiento de Infantería en donde fueron recibidos por Enrique Varela que les ofreció una copa de vino en su despacho. Entrada ya la madrugada la comitiva se dirigió hacia el compás de santo Domingo. Allí Varela les explicó lo ocurrido y ordenó que se levantara el sitio del barrio. Poco después se colocaban en distintos puntos de la ciudad y se enviaban a los periódicos un bando redactado por González Taltabull en el que se ordenaba que nadie subiera a las azoteas. Habían sido uno de los lugares desde los que más se había hostilizado a los guardias, se habían colocado a fuerzas en diversos puntos altos de la ciudad para vigilar que no se repitieran los ataques. Tenían orden de disparar y se podían producir errores.



Figuras 13 y 14. A la izquierda Manuel Muñoz Martínez, uno de los más destacados políticos republicanos gaditanos, acompañó a González Taltabull en su recorrido por el barrio de Santa María la noche del cinco de octubre. A la derecha Bando publicado por el Gobernador Civil advirtiendo de la colocación de tiradores en las azoteas de la ciudad.

Al día siguiente Cádiz despertó todavía inquieto por lo ocurrido el día anterior. Desasosiego que aumentó al leer las alarmantes narraciones de la prensa. A toda página, *Diario de Cádiz* titulaba que el «tiroteo incesante» del día anterior indicaba la presencia de «pistoleros profesionales». La crónica que ocupaba el resto de la primera plana hablaba de acción conjunta de tiradores. Aunque la normalidad parecía que comenzaba a restablecerse. Los servicios de limpieza y transportes funcionaban sin problemas y el comercio estaba abierto. La mayoría de los trabajadores

del astillero, los estibadores del muelle, de la fábrica de tabacos y del varadero habían entrado al trabajo. Sin embargo no lo habían hecho los de la Aeronáutica, los gremios de la construcción y las obras del dique. Por las calles continuaban concentrándose algunos grupos de trabajadores vigilados por las fuerzas del orden que habían aumentado su número con la llegada de cincuenta guardias civiles. También el vespertino *Noticiero Gaditano* hacía hincapié en la consideración de «revolucionaria» de la huelga, «que a nadie ha sorprendido» apostillaba.

La sensación de inseguridad ciudadana la completaban los rumores de que, a mediodía, se había reproducido el tiroteo en la Puerta de Tierra y la cuesta de las Calesas, la numerosa presencia de guardias en las calles y de tiradores en las azoteas y torre del Ayuntamiento, las detenciones que se seguían efectuando y la persistencia de la huelga, en contra de lo acordado, de importantes gremios, por el número de sus trabajadores e incidencia económica. Una situación que llevó al comité de huelga a reunirse para reconducir la convocatoria al punto previsto: la vuelta de la normalidad. En realidad la huelga tenía una doble cabeza: el CDE y el comité de la FLSU de la CNT. Los primeros desaparecieron y se ocultaron, los más conocidos de los segundos fueron buscados y detenidos los días siguientes. Entre ellos José Bravo Pérez, José Gómez Páez, Celestino Alvarado Quirós y Félix Ortega Rúa. También fueron detenidos los más destacados militantes comunistas de la ciudad como el médico Juan López Giráldez acusado de haber disparado desde su casa en la plaza del ayuntamiento.

Aunque las detenciones más importantes tuvieron lugar la mañana del día 6 en una tienda de bebidas llamada «Las Dos Calles» situada en una esquina de las calles Concepción y Solano. En los bajos de un edificio, como destacó el *Noticiero Gaditano*, en la que estaba situado un prostíbulo muy conocido en la ciudad. En uno de sus «camarotes» se reunieron Vicente Ballester Tinoco, carpintero y secretario local de la CNT, José Lucero Ruiz, albañil y presidente del Sindicato Único de la Construcción Urbana, José Alvarado Quirós, calderero y contador del comité local de la CNT, y Antonio Arteche Alba, también calderero. Según declararon en comisaría lo hacían para redactar un escrito en el que insistían en la vuelta al trabajo. Algo que era demostrable porque lo había publicado *Diario de Cádiz*. Negaron que hubieran ordenado disparar o insultar contra los guardias.



Figura 15. Vicente Ballester Tinoco, secretario de la CNT de Cádiz en 1931 y uno de los más destacados anarcosindicalistas de la ciudad.

C. N. del Z. 361
Comisión Local de Sindicatos Unicos
 A todos los trabajadores:
 Camaradas:
 Ante el confusio-
 nismo existente sembrado por elemen-
 tos irresponsables que tratan de con-
 fundir la buena fe del proletario
 seducido por algunos actua-
 les para fijar nuestra posi-
 ción.
 La huelga general
 iniciada la semana de Defensa
 tenía un plazo fijado por los
 sindicatos para que se reanudara el
 trabajo y se concluyera la huelga.
 Pero los elementos irresponsables
 que se han presentado en la
 situación actual, no han podido
 demostrar el carácter revolucionario
 de la huelga ni la responsabilidad
 de los dirigentes cenetistas deteni-
 dos y ya en libertad. En efecto
 fueron los sindicalistas los que
 dijeron la verdad. El escrito ya
 lo habían enviado a la redacción
 del *Diario de Cádiz* cuando
 fueron detenidos. De hecho
 Ballester había salido a la calle
 a comprar un ejemplar de la
 edición de tarde para ver si lo
 habían insertado. Así había
 sido. El rotativo local lo había
 incluido aunque eliminado al-
 gunos párrafos.

UNA OARA DE LA FEDERACION
 DE SINDICATOS UNICOS
 Se nos ruega la colaboración de los
 siguientes:
 A todos los trabajadores:
 Camaradas: Ante el confusio-
 nismo existente sembrado por elemen-
 tos irresponsables que tratan de con-
 fundir la buena fe del proletario
 seducido por algunos actua-
 les para fijar nuestra posi-
 ción.
 La huelga general
 iniciada la semana de Defensa
 tenía un plazo fijado por los
 sindicatos para que se reanudara el
 trabajo y se concluyera la huelga.
 Pero los elementos irresponsables
 que se han presentado en la
 situación actual, no han podido
 demostrar el carácter revolucionario
 de la huelga ni la responsabilidad
 de los dirigentes cenetistas deteni-
 dos y ya en libertad. En efecto
 fueron los sindicalistas los que
 dijeron la verdad. El escrito ya
 lo habían enviado a la redacción
 del *Diario de Cádiz* cuando
 fueron detenidos. De hecho
 Ballester había salido a la calle
 a comprar un ejemplar de la
 edición de tarde para ver si lo
 habían insertado. Así había
 sido. El rotativo local lo había
 incluido aunque eliminado al-
 gunos párrafos.

Figuras 16 y 17.
 Manuscrito de
 Vicente Ballester
 incautado por la
 policía (izquierda) y
 el texto mismo
 publicado por *Diario
 de Cádiz* (derecha).

No fue esa la versión ni de la prensa local ni de las autoridades. La reunión era la del comité revolucionario responsable de los incidentes y en ella se trataba de la continuación de la huelga y su extensión a otras localidades. Fue esta idea la que guió la instrucción del sumario que desembocó en un consejo de guerra. Aunque para entonces, como veremos, ni se había podido demostrar el carácter revolucionario de la huelga ni la responsabilidad de los dirigentes cenetistas detenidos y ya en libertad. En efecto fueron los sindicalistas los que dijeron la verdad. El escrito ya lo habían enviado a la redacción del *Diario de Cádiz* cuando fueron detenidos. De hecho Ballester había salido a la calle a comprar un ejemplar de la edición de tarde para ver si lo habían insertado. Así había sido. El rotativo local lo había incluido aunque eliminado algunos párrafos.

El llamamiento no podía tener otra interpretación que la pedir el cumplimiento del acuerdo de reanudar el trabajo y advertir del confusio- nismo que trataban de sembrar «elementos irresponsables». Avisaba a los trabajadores de que la situación en la que se encontraba el comité local era difícil pero que continuaba actuando y había analizado la situación sin encontrar motivos suficientes para cambiar de actitud. Difícil encontrar en el comunicado una llamada a intensificar la acción y, mucho menos, a convertirla en revolucionaria. ¿Quiénes eran esos irresponsables de los que hablaba? Posiblemente sectores del propio anarcosindicalismo que habían prolongado la huelga en puntos clave de la economía local. Aunque también pudieran referirse a la actividad del exiguo comunismo local. Lo que explicaría las detenciones efectuadas por las autoridades y la clausura, como

de los cenetistas, del local del Sindicato de Oficios Varios, adherido a la ISR, de la calle Hospital de Mujeres, 56. De hecho hubo un intento de continuar la huelga general, como protesta por las detenciones. Entonces fueron detenidos otros cuatro destacados militantes comunistas y anarcosindicalistas: Juan Camerino Mesa, jardinero del ayuntamiento que en 1936 sería concejal por el PCE, Francisco Gavilán Jiménez, jornalero y afiliado al PCE, Emilio Muñoz Garrido, albañil y presidente de la sección del gremio en el sindicato cenetista y Jesús de la Fuente Fernández, carpintero y vocal del sindicato de la Madera.

Parece por tanto claro que existió una deliberada voluntad de hinchar lo ocurrido transformando unos incidentes, ciertamente violentos, pero no en el grado con los que se les presentaba, incluida la gravedad de la herida del teniente Riaño y un supuesto atentado contra Varela, en un hecho revolucionario. Un elemento más de la confrontación entre el ejercicio efectivo de las promesas reformistas del nuevo régimen y el anarcosindicalismo convertido en vehículo de la protesta contra el incumplimiento de las esperanzas despertadas. Una huelga puntual con unos objetivos muy concretos terminaba convirtiéndose en una especie de ensayo revolucionario con la intervención de pistoleros venidos de fuera. «Cuatro de los siete llegados han sido detenidos» aseguraba el día 8 *Diario de Cádiz*.

3. La Causa 124 de 1931

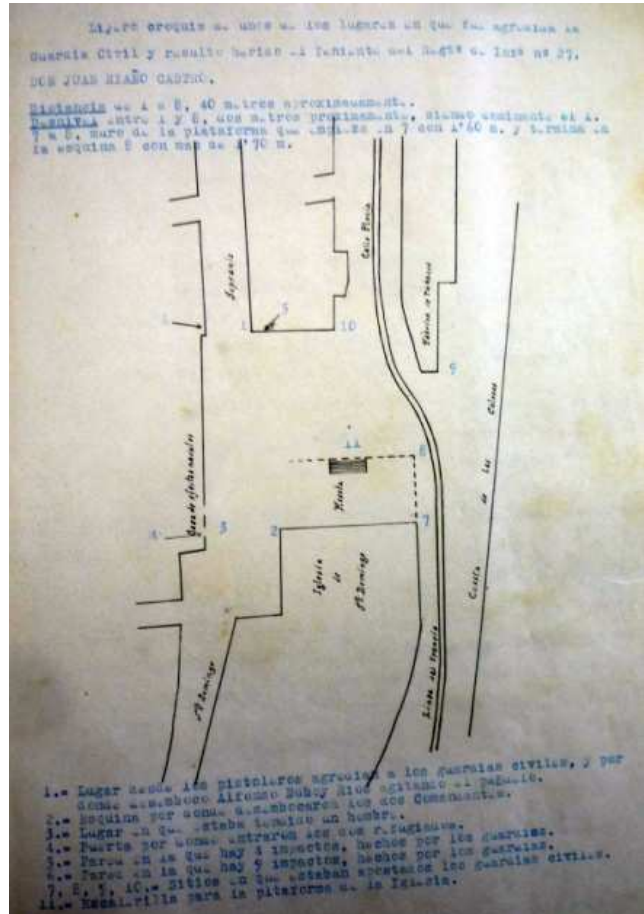
Al verse implicadas en los tiroteos fuerzas del ejército y herido un oficial fue el Juzgado Militar de la Base Naval de Cádiz el que terminó haciéndose cargo de las actuaciones iniciadas el mismo día 5 de octubre. La Guardia Civil instruyó un atestado sobre las agresiones que habían sufrido algunos de sus miembros y herido al teniente Riaño frente al convento de santo Domingo. También el juzgado militar, a partir de un informe de Varela, instruyó unas diligencias sobre el disparo contra Riaño. Todas terminaron incorporadas al sumario que instruyó el capitán de artillería Julio Ramos Hermoso nombrado juez especial por la Auditoría de la Segunda División Orgánica.

En el atestado de la Guardia Civil declararon algunos de los guardias presentes y los cinco detenidos en las inmediaciones del lugar del suceso. En poder del jefe de la Comandancia, la misma tarde, lo envió al juez permanente militar: el capitán de Infantería Cipriano Briz González que se consideró competente y comenzó sus actuaciones con la petición a las casas de Socorro y hospitales de la ciudad de los ingresos realizados de heridos por arma de fuego.

Su primer interés fue el de aclarar las circunstancias en las que se había producido la herida del teniente Juan Riaño Castro. El relato que obtuvo Briz de las declaraciones de los testigos presenciales fue que hacia las once de la mañana llegó a la plaza de santo Domingo un numeroso grupo de personas, procedente de las calles Sopranis y Plocia, que venía huyendo del desalojo de la plaza del Ayuntamiento y de los disparos que se habían oído. Los guardias civiles que protegían la vía del tranvía fueron apedreados y sufrieron el impacto de macetas y otros objetos lanzados desde los balcones. Respondieron disparando sus máuseres mientras que retrocedían hasta el compás del convento. Tiros que les fueron devueltos con otros de pistola. Fue el comienzo de un tiroteo que se prolongó durante una hora.



Figuras 18 y 19. Arriba la plaza de Santo Domingo. A la derecha croquis de los hechos incorporado al sumario.



Conviene en este punto detener el relato de lo que ocurría en Santo Domingo para subir por la Cuesta de las Calesas hacia la Puerta de Tierra. Poco más de un centenar de metros. El parte de Varela aseguró que poco antes del mediodía habían comenzado a oírse disparos «en las proximidades del cuartel» y que fue informado de que la Guardia Civil estaba siendo agredida. Entonces se dirigió hacia el lugar, a donde habían llegado numerosos refuerzos, para distribuir las fuerzas entre las esquinas de la fábrica de Tabacos y el convento con la cuesta de las Calesas y en la de la calle Ploia.

Estamos de nuevo en la plazoleta a donde ha llegado Varela y un grupo de sus oficiales. Se abre ante la fachada principal de la iglesia de Santo Domingo y tiene una especie de meseta de la que se desciende a lo que es propiamente la plaza por unas escaleras. Huelguistas y guardias siguen hostilizándose. Se oyen insultos, caen piedras y otros objetos y algún disparo. A un lado, cerca del almacén de efectos navales propiedad de Manuel Freire Costa, hay un hombre vestido de oscuro tendido en el suelo. Parece que ha sido alcanzado por algún disparo cuando un grupo había cruzado desde la calle Sopranis intentando perderse por las calles del barrio de Santa María, por Higuera y Santo Domingo. Los huelguistas intentaron protegerse lo mejor que pudieron. Dos terminaron entrando en el almacén y allí permanecían resguardados. Al poco de llegar Varela se destacó un hombre que, brazos en alto y agitando un pañuelo, solicitó una tregua para recoger el cuerpo. El coronel y los que le acompañaban cruzaron la plaza hasta llegar, pegados al muro de la escalinata, a

pocos metros del caído. Fue en ese momento cuando sonó un disparo que alcanzó al teniente Juan Riaño Castro. La confusión se apoderó del lugar. Varela y sus compañeros pudieron arrastrar consigo al parlamentario. La persona que estaba en el suelo se levantó y desapareció.

El juez Briz se trasladó al día siguiente al lugar de los hechos y ordenó levantar un croquis con la señalización de los sitios en los que se encontraban las fuerzas, los huelguistas y el caído. Después tomó declaración al propietario de la tienda de efectos navales ante cuya puerta habían tenido lugar los hechos y a los cinco detenidos durante ellos. Manuel Freire aseguró que los dos jóvenes entraron precipitadamente en su establecimiento pidiendo refugio que terminaron siendo detenidos. Después encontró, escondidas tras una puerta, unas piedras que, pensaba, llevaban. No podía aportar ningún dato sobre los disparos que hirieron a Riaño porque, ante el peligro existente, todos se habían refugiado en el patio interior del almacén.

Después el juez se trasladó a la cercana prisión provincial para tomar declaración a los dos jóvenes que se refugiaron en la tienda de Freire. Ambos negaron que estuvieran en el grupo que disparó. También negó cualquier intervención en los hechos Francisco Alba Delgado, un albañil afiliado a la CNT, que bajaba por la cuesta de las Calesas, en compañía de un niño, y fue interceptado por la Guardia Civil. Otro cenetista, Antonio Alba Gutiérrez también fue detenido por llevar el carnet de la Confederación. Finalmente interrogó a Alfonso Dubios Ríos, un trabajador del astillero, la persona que se había adelantado para pedir la tregua. Negó que se hubiera adelantado para solicitar el alto el fuego. Quiso cruzar la plaza y pidió permiso a la Guardia Civil. Por eso se dirigió hacia ella con el pañuelo. Momento en el que fue detenido. Ninguno de ellos terminaría encausado. Durante los días siguientes la investigación del juez dio un giro. Sin olvidar el disparo contra Riaño, la principal preocupación judicial fue la de demostrar la existencia de un complot revolucionario en el que había intervenido un numeroso grupo de pistoleros profesionales. Algunos llegados desde Sevilla donde se habían vivido acontecimientos similares, aunque de mayor gravedad, unos meses antes.

Aunque Briz continuó instruyendo el sumario unos días más, al poco, la autoridad judicial de la División nombró a un juez especial. En ese tiempo pidió información a las casas de socorro y hospitales de la ciudad sobre los heridos ingresados en 5 de octubre y confirmó las declaraciones de los guardias presentes en los sucesos, diversos testigos y de los detenidos. Además comenzó a investigar el tiroteo que se había producido ante los cuarteles de san Roque y santa Elena en cuyo transcurso el único herido había sido un muchacho de 12 años que se encontraba en uno de los viejos parapetos de la muralla sobre la que se asentaba el primero de los cuarteles. Cuando unos días después el juez ordenó investigar a los vecinos y realizar un croquis para señalar los lugares de los edificios desde donde se había disparado sólo pudo señalar como daños los que habían producido en ellos los disparos de los soldados y guardias civiles.

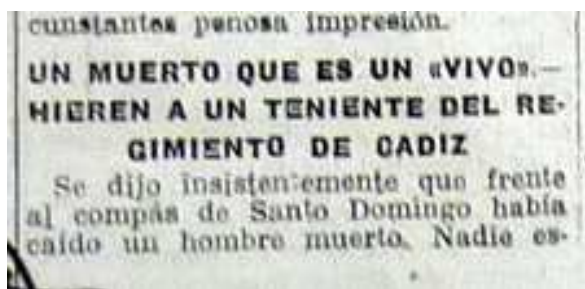


Figura 20. Casa en la muralla de San Roque desde donde se supuso que se disparó contra el cuartel de igual nombre. Allí mismo resultó herido el muchacho.

Un día antes de abandonar la investigación, el ocho de octubre, Briz interrogó a José Mateo Arjona. Era hermano de Juan Mateo que había sido detenido la madrugada del día anterior. Mateo era un albañil de cuarenta y tres años nacido en Sevilla que había llegado hacía un par de meses a Cádiz procedente de Larache. En algún momento se había ido a vivir, con su mujer y ocho hijos, a Salé, cerca de Rabat, en el Marruecos francés. Allí no había encontrado trabajo y, dejando a su familia, se había trasladado a la zona española, a Larache de donde había sido expulsado por sus actividades obreristas al intentar crear una sociedad de albañiles. Se instaló en Cádiz donde vivía su hermano.

En los dos meses que llevaba en la ciudad había tenido una intensa actividad sindical dentro de la CNT. En paro, había formado parte de diversas comisiones que había gestionado ante las autoridades la creación de puestos de trabajo. Se trataba, por tanto, de alguien conocido por la policía. Fue precisamente un guardia municipal, presente en el compás de santo Domingo, quien creyó reconocerlo como el «muerto». Arjona había estado por la zona de la plaza del Ayuntamiento y la calle Plocia durante los incidentes. Después se había ido al local sindical de la plaza de las Viudas en donde se encontraba cuando llegó la policía para clausurarlo hacia la una de la tarde. Allí lo habían identificado y cacheado pero no detenido.

Para entonces en la Auditoría de Guerra en Sevilla se había decidido nombrar un juez especial que se hiciera cargo del sumario. La herida del teniente y las derivaciones revolucionarias que se le suponían a los hechos así lo aconsejaban. Se nombró al capitán Julio Ramos Hermoso destinado en el Regimiento de Artillería de Costa nº 1 de Cádiz. Ramos era también abogado y durante los años republicanos ejerció en algunos procesos penales. Aunque su mayor reto fue la instrucción en 1933 del consejo de guerra contra los campesinos de Casas Viejas acusados de asediar y herir a dos guardias durante los sucesos que estremecieron al país.



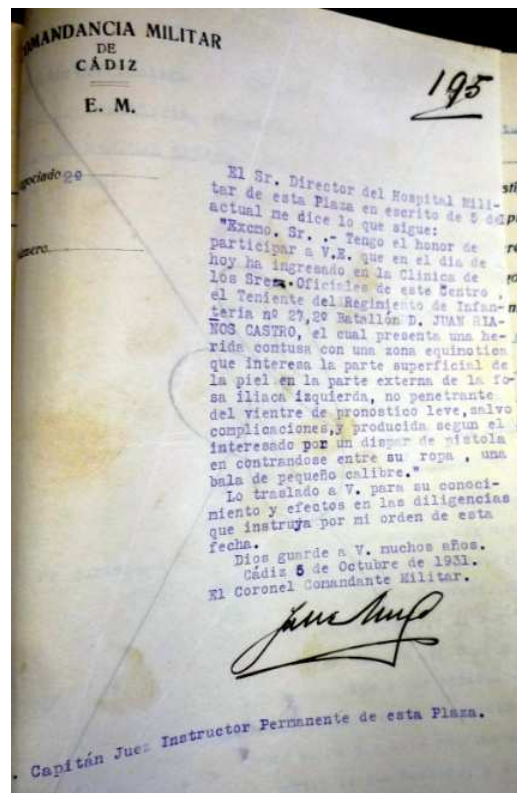
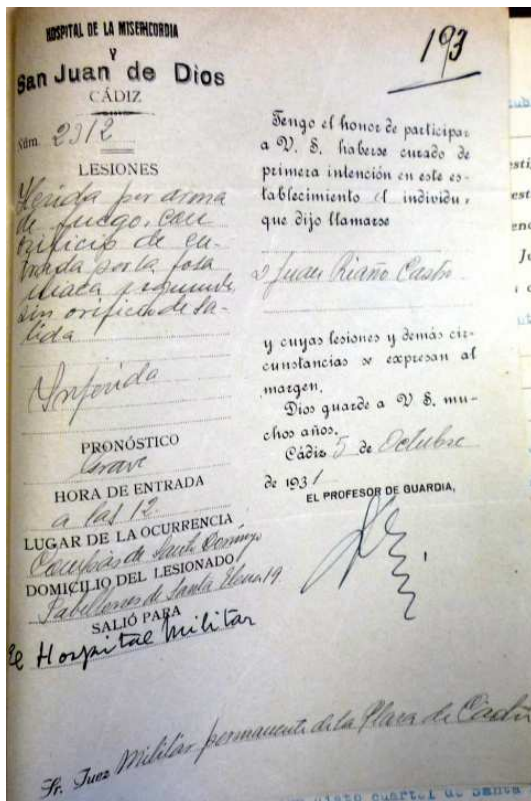
Figuras 21 y 22. A la izquierda Juan Mateo Arjona el anarcosindicalista, recién llegado de Larache a Cádiz que fue acusado de tirarse al suelo para servir de cebo a Varela. Arriba la crónica de prensa en la que se acuñó el apodo de «El muerto vivo».

El primer documento que recibió Ramos para incorporar al sumario fue un oficio del comisario jefe de la policía de Cádiz informándole de que a pesar de las activas gestiones que realizaban sus hombres todavía no habían localizado al autor del disparo contra el teniente Riaño. Por su parte Ramos citó a los detenidos, empleados de la casa de efectos navales, vecinos de las casas cercanas a los cuarteles y policías, dos guardias municipales y varios guardias civiles de los que habían estado en el convento de santo Domingo durante los hechos. De esta forma pretendía cerrar los testimonios de lo ocurrido.

La herida del teniente Riaño, de momento, quedó postergada. A pesar de la alarma con la que fue presentada a la opinión pública, una herida de bala en el vientre, la realidad era muy distinta. Tras ser llevado al cuartel de san Roque, Riaño fue trasladado al hospital de san Juan de Dios. Allí el médico que le atendió aseguró que el teniente tenía una herida de bala con orificio de entrada por la fosa ilíaca izquierda sin que se advirtiera otro de salida. Calificaba el pronóstico de grave y ordenó su evacuación al Hospital Militar. En el centro castrense la percepción de la herida cambió totalmente. Su también director médico, Alejandro Rodríguez Solís, dictaminó que la herida era leve y no existía orificio de entrada, sólo una contusión superficial externa, efectivamente en el lado de la fosa ilíaca izquierda, con zona equimótica. Es decir un moratón. El proyectil que había provocado la contusión lo encontraron entre las ropas del teniente. Al día siguiente el propio Riaño pidió el alta voluntaria.



Figura 23. El capitán Julio Ramos Hermoso, nombrado juez especial para entender de la causa. La foto corresponde al consejo de guerra contra los campesinos de Casas Viejas en 1934.



Figuras 24 y 25. Partes médicos contradictorios de los facultativos de los hospitales de San Juan de Dios y Militar sobre la herida, y su gravedad, del teniente Riaño.

Referente a la consideración revolucionaria de lo ocurrido, la comisaría de policía le remitió una primera relación de detenidos, además de los cinco ya citados, entre el 5 y el 7 de octubre. Un total de 22 personas entre los que figuraba el considerado comité revolucionario, los cenetistas Ballester, Lucero, Arteche y Alvarado; dos detenidos el día cinco en Extramuros por considerárseles sospechosos por llevar carnet de la CNT, Francisco Illescas Sánchez y Juan Paya Aguilera; el presidente del sindicato pesquero de la CNT «El Despertar Marítimo», José Rodríguez Siras, apresado durante la razzia nocturna del barrio de Santa María; Juan Mateo Arjona, cenetista acusado de fingirse muerto para facilitar el atentado y otros conocidos sindicalistas gaditanos que formaban parte del comité local o la policía los tenía como influyentes: Emilio Vera Barberá, Félix Ortega Rúa, Domingo Arenas Martínez, José Gómez Páez, Celestino Alvarado Quirós, José Antonio Romano Jaulas y José Bravo Pérez. Además de los comunistas Juan López Giráldez, Antonio Grimaldi Gallardo, José Díaz Barrios y Eduardo del Río Romero. De los restantes, Gabriel Alba Pardo, Antonio Peña y Guillermo Santaella Romanceiro, decía que no se les conocía antecedentes sociales.

El informe del comisario jefe Leal de Ibarra sobre la detención de los cenetistas reunidos en el bar de la calle Solano no dejaba la menor duda sobre la calificación de la huelga como «movimiento obrero revolucionario» y a los detenidos como sus «elementos directores». Ya se ha dicho que los documentos incautados, y presentados como pruebas de la voluntad revolucionaria, no eran sino el borrador del comunicado pidiendo la vuelta al trabajo que había publicado la prensa local. Estaba

clara la intención de descabezar al anarcosindicalismo local, y de paso el exiguo comunismo gaditano, aprovechando la ocasión. De todos los detenidos en estos días sólo uno terminó siendo procesado, y finalmente absuelto, Guillermo Santaella Romanceiro.

Santaella estaba entre los considerados por la policía sin antecedentes sociales. Tenía 20 años, de profesión jornalero y sin domicilio fijo. Fue detenido por una pareja de policías municipales de la que uno de ellos, José Guerrero Ruiz, tendría un importante papel en la represión golpista del verano de 1936. Resulta llamativo que mientras la policía gubernativa dijera que no tenía antecedentes, los municipales, al entregarlo, lo catalogaran como miembro del Partido Comunista y elemento «peligroso». Cuando el municipal Guerrero ratificó su información ante el juez añadió que Santaella era conocido en los cafés por su defensa de las ideas «comunistas». En 1936 figuraría en la lista de «dirigentes y hombres de acción de la CNT» elaborada por los represores.

Estaba acusado de ser uno de los que apedrearón los tranvías en la calle Plocia y se enfrentaron con la Guardia Civil. De hecho, otro municipal que se encontraba en la calle Plocia cuando se produjeron los incidentes aseguró que estaba entre los manifestantes que huyeron por el callejón de Amaya y que había sido desde allí desde donde partieron los primeros tiros de pistola. Había sido visto levantando los husillos y arrojarlos a las vías para obstaculizar el tráfico y sobre todo, había ingresado en el hospital de san Juan de Dios, terminados los incidentes, con un parte firmado unos días antes para curar unas lesiones en una pierna. Le dieron el alta al día siguiente y, al otro, fue detenido.

Santaella negó las acusaciones y aseguró que no había ido a curarse al hospital el día que le habían indicado porque quería ir a una novillada que se celebraba en San Fernando y sabía que si acudía a san Juan de Dios no iba a poder hacerlo. Por eso lo dejó para el lunes cinco. No fue la única vez que Santaella y Ramos se encontraron Tres años después el militar ejerció de defensor suyo cuando fue acusado de vender unos zarcillos robados que no se pudo demostrar que Santaella conociera su origen.

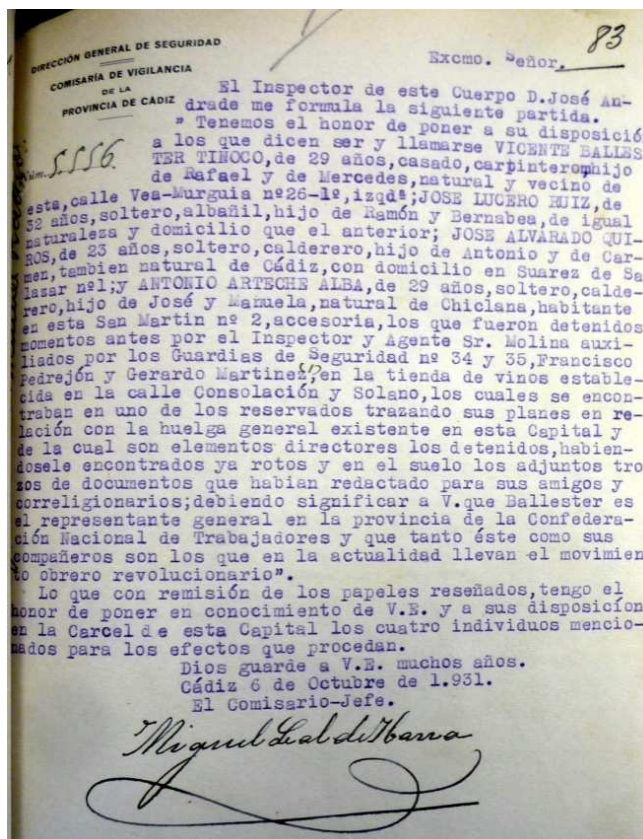


Figura 26. Parte de la detención de la cúpula cenetista gaditana.

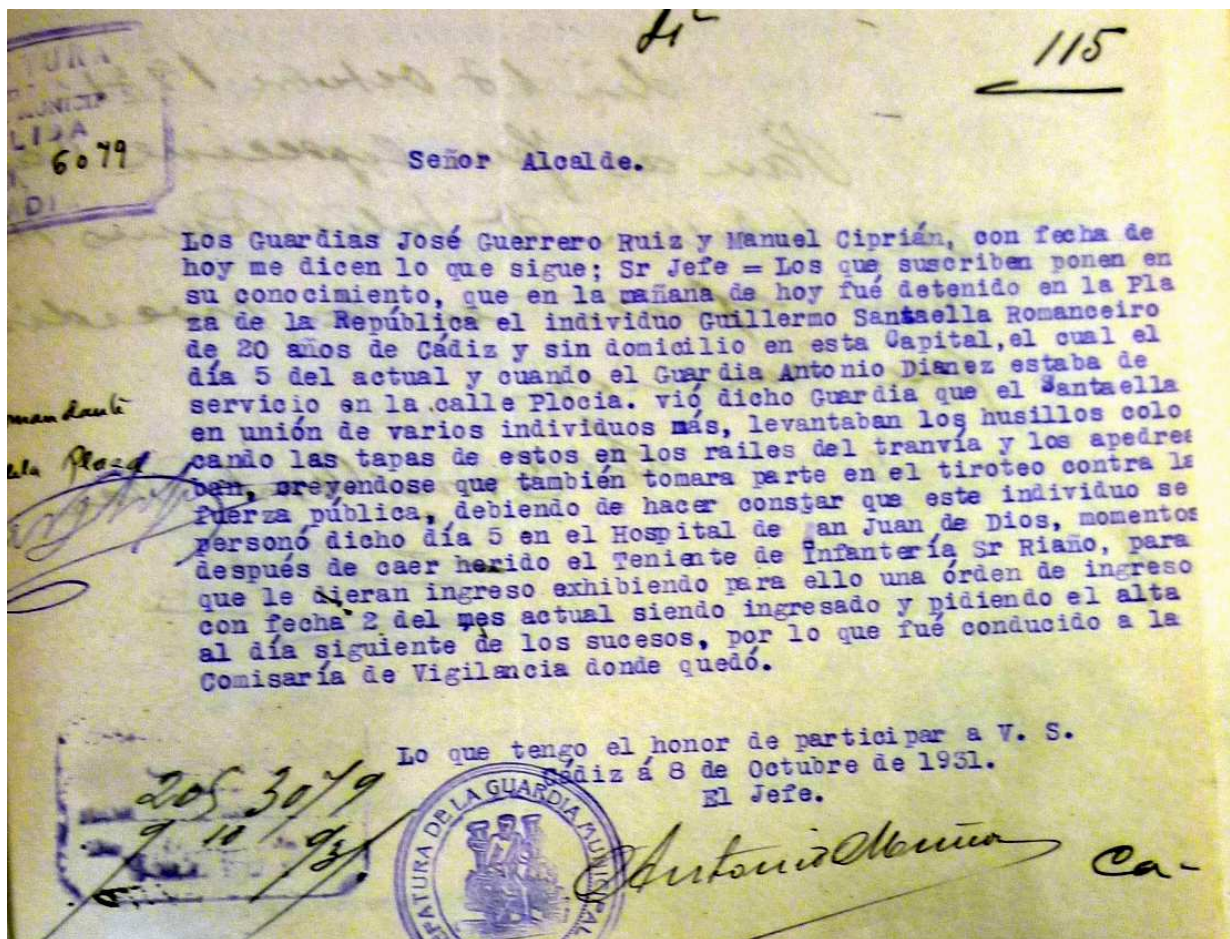


Figura 27. Parte de detención de Guillermo Santaella Romanceiro, el único de los detenidos esos días que terminó siendo procesado.

El juez Ramos, mientras seguía tomando declaraciones a los detenidos, practicó el martes 13 de octubre un reconocimiento ocular de los alrededores de los cuarteles de santa Elena y san Roque que incluyó el levantamiento de un croquis. El objetivo era situar con exactitud los lugares desde donde se había disparado a los centinelas y guardias civiles. Señalados por los testigos que le acompañaban se situó en algunos de ellos para comprobar si era posible apuntar hacia los cuarteles. Cuando terminó estas diligencias más que poder aclarar de dónde y quienes habían disparado lo que recogió fue una serie de declaraciones de vecinos que hablaban de pasos en las azoteas y, por supuesto, negaban que se hubiera disparado desde sus pisos que, en algún caso, habían sido destrozados por el fuego de los centinelas y guardias civiles situados en los acuartelamientos. Algunos de ellos eran de militares que vivían por la zona e incluso un concejal socialista del ayuntamiento, Manuel Prieto López.

Tras completar todo lo relacionado con los tiroteos Ramos se centró en tomar declaración a los 26 supuestos cabecillas de la insurrección. Todos negaron que hubiera existido alguna intención de declarar una huelga revolucionaria. La sorpresa que se encontró fue la plasmación de las divergencias entre anarcosindicalistas y comunistas que, unos y otros, esgrimían como prueba de que no era posible una actuación conjunta en un proyecto revolucionario.

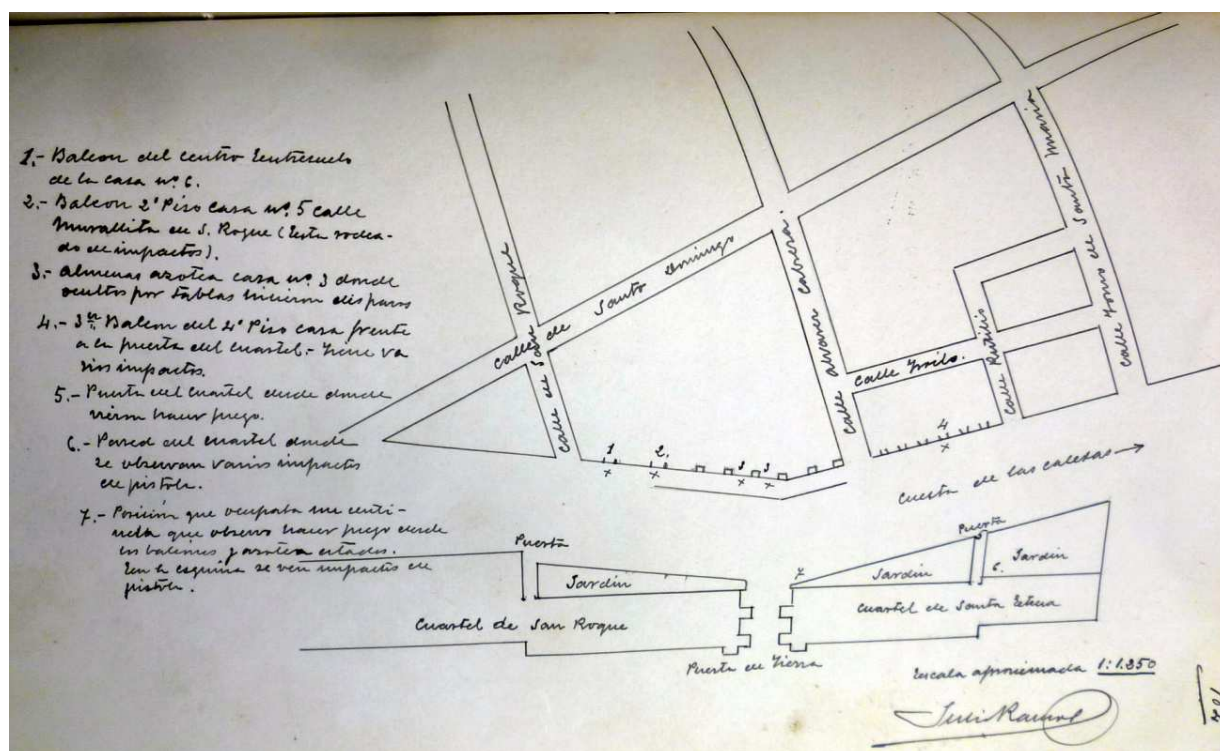


Figura 28. Croquis levantado por Julio Ramos indicando los lugares desde donde se tirotearon los cuarteles de Puerta de Tierra.

De los dirigentes comunistas detenidos los dos más importantes fueron el médico Juan López Giráldez y el ajustador Juan Camerino Benítez secretario de la Sindicato metalúrgico adscrito a la Sociedad de Oficios Varios de la Internacional Sindical Roja. Cuando Ramos interrogó al primero no dudó en afirmar que sus relaciones con la CNT eran «poco cordiales» y que durante la huelga habían ido, él y Camerino, al local cenetista para intentar convencerles de lo equivocado de su táctica. Su declaración fue tan intensa que el juez no pudo evitar inscribir en el sumario una «diligencia de constancia» sobre el largo tiempo que el detenido había intentado demostrarle la superioridad de la táctica sindical comunista sobre la anarquista. Al día siguiente, Camerino afirmó que estaba completamente «reñido con los anarcosindicalistas».

Para completar el puzle de los organizadores de la revolución faltaban los miembros de la Comisión de Defensa Económica. Los seis estaban desaparecidos desde el día cinco. Ramos, para confirmar su situación y antecedentes sociales pidió a la policía que le informara. La respuesta le confirmó las noticias no oficiales que le llegaban: Bonat, Galé y Carrero eran anarcosindicalistas muy destacados desde hacía largo tiempo y la CDE una mera pantalla para desencadenar la huelga general.

Llegado a este punto Julio Ramos consideró que ya tenía elementos más que suficientes para comenzar a tomar decisiones. Así que el 20 de octubre ordenó el procesamiento de Guillermo Santaella, por considerar que su presencia en el hospital pudiera estar relacionada con la herida sufrida por el teniente Riaño, y Juan Mateo Arjona por ser el que se fingió muerto. Además procesó a José Lucero, José Alvarado, Antonio Arteche y Vicente Ballester como directores de la huelga.

También puso en busca y captura a Bonat, Carrero y Galé y ordenó la libertad de varios de los detenidos. Aunque el hecho más destacado fue que tomó declaración a Dolores de la Vega y de la Guerra. Una joven de 19 años que, al parecer, durante los incidentes se encontraba efectuando unas compras en la droguería de la plaza de Santo Domingo. Una declaración relacionada con el informe

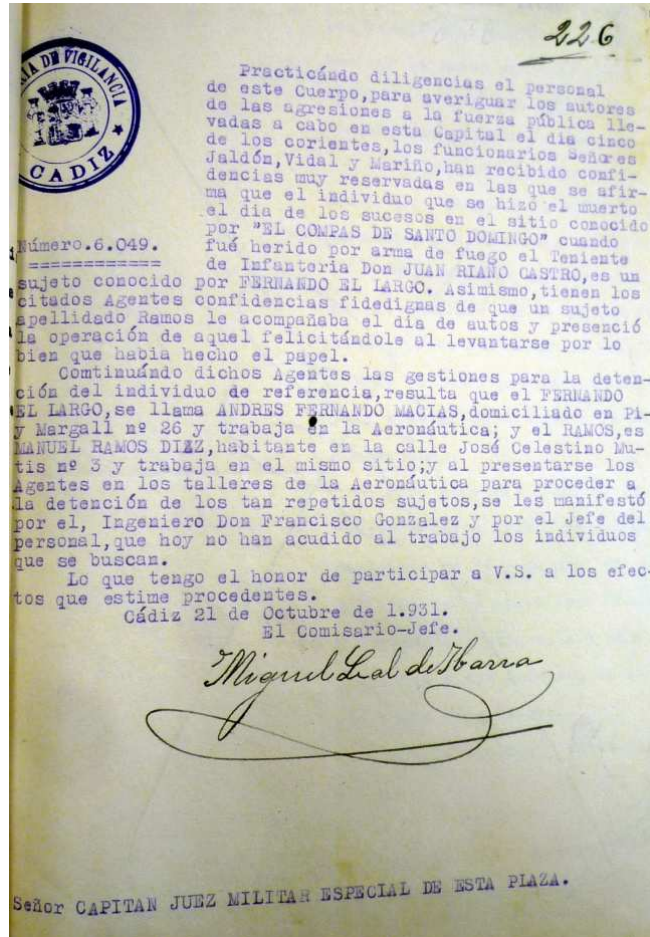


Figura 29. Informe del Comisario de Cádiz al juez Ramos sobre las causas y la detención de Andrés Fernando Macías.

que le envió al juez el comisario-jefe de la policía de Cádiz en el que le informaba de que la persona tendida en el suelo se llamaba Andrés Fernando Macías. A su lado había estado otro activo anarco-sindicalista local Manuel Ramos Díaz, trabajador de la Aeronáutica como Macías.

Dolores de la Vega había dicho que cuando salía de la droguería habían comenzado los disparos. Aseguró que en el suelo había visto a un muchacho que conocía como «Fernando El Largo» que trabajaba en los aviones. Parecía embriagado. En la puerta de al lado de la droguería estaba otro joven cargando una pistola y en la esquina a otro disparando. Entonces, un señor en camisa blanca pidió la paz con un pañuelo. En ese momento disparó el que había cargado la pistola contra los militares. Después ayudó a levantarse al caído y éste le dijo: «¡Buen ratito me has hecho pasar!». El otro le respondió que había estado muy bien que se quedara tendido y no se hubiera levantado antes.

Las demás informaciones eran idénticas a las que había proporcionado Dolores de la Vega. Por tanto no resulta descabellado que la aparición de la testigo se había producido durante las pesquisas policiales por la zona de los sucesos. Apenas procesado Mateo Arjona resultaba que éste no era el célebre «Muerto vivo» como lo había bautizado un redactor de *Diario de Cádiz*. Así que el juez ordenó la inmediata búsqueda, detención y registro del domicilio de Macías. La policía ya había ido a buscarles a la factoría de CASA. Macías fue detenido el 22 en su propio domicilio. Ramos escapó. Se marchó a Sevilla. Nada comprometido apareció en sus domicilios. De todas formas, el juez Ramos ordenó la prisión incomunicada de Macías y dictó su procesamiento como la persona que se había hecho el muerto.

Andrés Fernando Macías declaró el viernes 23. Tenía 23 años y había nacido en La Habana, montador de la Aeronáutica, sabía leer y escribir como prácticamente todos los detenidos. Vivía en

los Callejones con Antonio Barberi Benítez, el hermano de su novia, porque estaba peleado con su padre. Reconoció que era él la persona que había quedado tendida en el compás de santo Domingo. Pero no para preparar una trampa a Varela. Como otros muchos a las once y media de la mañana del cinco estaba en la plaza del ayuntamiento y, cuando la Guardia Civil, comenzó a desalojarla corrió hacia la calle Sopranis hasta llegar a santo Domingo. En ese momento los guardias que estaban en la esquina de la Tabacalera con la calle Plocia dispararon. La confusión fue tremenda y le entró un pánico tan grande que se quedó paralizado. Sonó entonces otra descarga y cayó al suelo frente a al tienda de efectos navales. Allí quedó, sin moverse del miedo que tenía, hasta que alguien le levantó. Entonces se fue directamente a su casa.

Sin entrar en mayores profundidades por fin Ramos Hermoso parecía tener controlado un sumario que corría el riesgo de dispersarse. Ahora podía centrarlo en las dos cuestiones que más le interesaban: el supuesto atentado a Varela y la depuración de las responsabilidades de quienes habían organizado un movimiento revolucionario. La segunda cuestión era la más importante social y políticamente. Así que circunscribió las responsabilidades en los miembros del comité de la CNT gaditana detenidos en la taberna de la calle Solano y los componentes del CDE. Respecto a los disparos contra los militares se apuntaba a la tesis de que se trataba de un atentado personal contra Varela perfectamente organizado en el contexto de un movimiento revolucionario. Junto al procesamiento de Andrés Fernando Macías García, mantuvo el de Juan Mateo Arjona, el primer «muerto». Aunque todavía le faltaba conocer quien había disparado.

Sin perspectivas de salir en libertad Ballester, Lucero, Alvarado y Arteché mandaron un escrito al juez recordándole que en la documentación incautada por la policía, alguno publicado en la prensa, sólo se hablaba de terminar la huelga no de continuarla y mucho menos de darle un carácter revolucionario. También le insistían en que, efectivamente, los miembros del comité de huelga y del CDE eran anarcosindicalistas pero que la huelga también la habían secundado sociedades adscritas a la UGT y las llamadas autónomas. Aunque el juez rechazó las alegaciones citó a diversos presidentes de estas sociedades para que le informaran sobre si era verdad que la huelga la habían convocado sociedades distintas de las de la CNT. Los de las de toneleros y arrumbadores lo confirmaron. Por su parte el de los tipógrafos lo negó. Ramos era consciente de las contradicciones de los testigos y la debilidad de las pruebas que confirmaran que se hubiera producido efectivamente encontronazos armados entre grupos de revolucionarios y las fuerzas de orden y del ejército. Una cosa eran las noticias de prensa y otra una instrucción sumarial.

A punto de terminar el mes apareció una pista que conduciría a Ramos a la persona que fue declarada autor material de los disparos. El día 30 declaró Jorge Juárez Padiña un ayudante de mozo que no había estado en los grupos de la calle Sopranis, pero que conocía a Macías García. Dijo que un amigo, Juan Tirado Conde, le había dicho que sabía quien había disparado contra los militares. Ambos habían sido citados a consecuencia de que habían sido citados en una nueva declaración de Dolores de la Vega que se estaba mostrando como una fuente de la que manaba sin cesar informaciones. Como a Macías, también conocía a quien había visto con una pistola en la mano disparar contra el grupo de militares. Aunque no podía indicar su domicilio sí los de otras personas que podían saberlo.

Dolores de la Vega era como el carburo de un minero que guiaba al juez en la instrucción cuando la oscuridad le impedía avanzar. Resultaba providencial para el conocimiento de la verdad aquella vecina que se encontraba casualmente aquella mañana en la droguería del compás y que tan buen ánimo había tenido en medio de tanta confusión y con tanto miedo suelto. Como dijo, le había podido más su curiosidad. Con esas pistas la policía localizó a Ambrosio García Bancalero, un albañil de 36 años que vivía, con su madre, en una habitación de la casa número 11 de la calle Rosario y era militante sindicalista. Fue trasladado a comisaría en donde Dolores de la Vega lo reconoció como el hombre que vio disparar. Allí mismo ocurrió otro hecho que vino a empeorar su situación. García Bancalero se cruzó con Juan Tirado Conde. Al parecer, éste, al verlo, exclamó: «¡ese es!, ¡ese es!».

Al día siguiente fue ingresado en la prisión de la ciudad y su domicilio registrado por la policía. Ante Ramos, García Bancalero negó las acusaciones. En efecto se encontraba por la zona, pero en la calle Botica. Llegó al compás cuando escuchó los disparos. Iba huyendo con otros muchos que, como él, también se acercaron a la persona que estaba tendida en el suelo para ayudarla. No pudieron. El hombre pegó un salto y salió corriendo. Él hizo lo mismo por la calle de la Higuera, un estrecho callejón que desembocaba en el lateral del convento. Después se marchó a su casa.

La policía no le dio mucho crédito. No le resultaba un desconocido. Tenía «pésimos antecedentes». Tampoco Ramos que ordenó su procesamiento y que se efectuara una rueda de reconocimiento en la prisión. Entre quienes acompañaban el día cinco a Varela y sus oficiales había estado un agente de policía, Francisco Morales Fresnes, que podía terminar de identificar al autor de los disparos. No tuvo ninguna duda cuando vio a García Bancalero entre otros seis reclusos más: «Ese. El tercero por la izquierda es» aseguró categórico.

Un mes después de los acontecimientos estaba muy claro que las autoridades pretendían utilizarlos para descabezar a la CNT gaditana. La magnificación de lo ocurrido en la prensa, el alarmismo desplegado, no se correspondía con lo que las investigaciones judiciales aportaban. Sin embargo, de momento, cogida carne, las autoridades no pensaban soltarla. El juez dirigía sus investigaciones en una doble dirección: la de la organización revolucionaria de la huelga y la autoría de la agresión al grupo de militares. En ambos casos la fortaleza de la instrucción tenía grandes vías de agua. Nada probaba que el comité de la CNT local ejerciera como de comité revolucionario. Al contrario, más allá de las declaraciones públicas, no estaba tan clara la finalidad revolucionaria de una huelga de 24 horas convocada por la mayoría de las sociedades obreras de la ciudad. Declaraciones y documentación incautada probaban precisamente lo contrario. Los miembros del comité local detenidos lo que pretendían era terminar con cualquier prolongación del conflicto. Y lo habían conseguido.

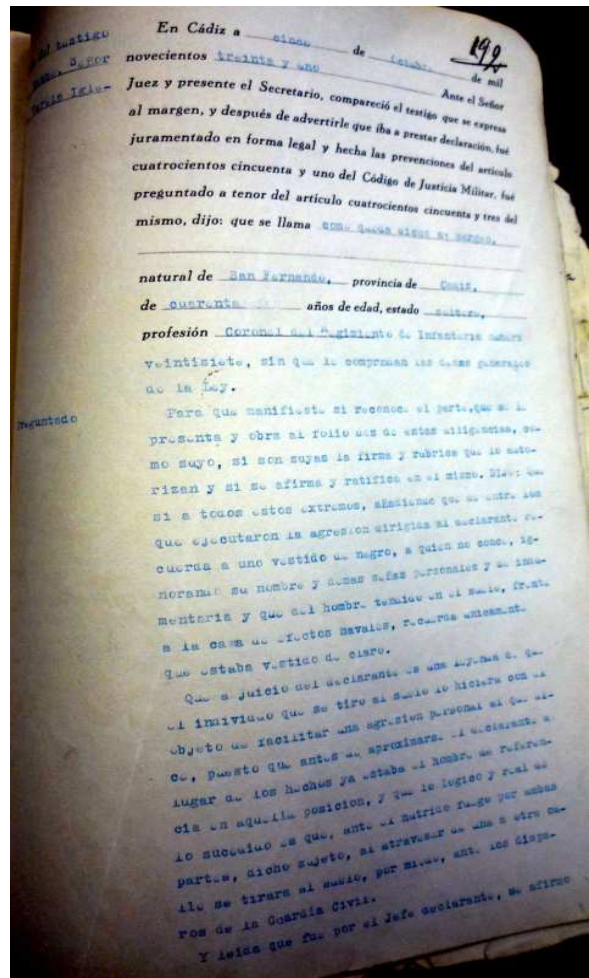
De otro lado, la intervención de un «ejército» de pistoleros profesionales no se vislumbraba por ningún lado. Los intensos tiroteos parecían haber sido más disparos de las numerosas fuerzas del orden presentes en la calle que el enfrentamiento entre dos grupos del que se hablaba en la prensa y aseguraban las autoridades. Era cierto que había habido manifestantes con pistolas que habían respondido pero de ninguna forma se podía hablar de la batalla por la ciudad que había quedado

dibujada en las páginas de los periódicos locales y declaraciones de las autoridades. De hecho, salvo la herida del teniente Riaño, el resto de heridos lo habían sido por las fuerzas del orden y no eran precisamente pistoleros, sino vecinos que estaban en sus casas o un niño que se cruzó por donde no debía. Incluso la gravedad e intencionalidad de los disparos contra el grupo de militares no parecía deberse tanto a un atentado preparado, como a una derivación de una coyuntura concreta. Más aún, después de haberse hablado de una grave herida en el vientre todo había quedado reducido a un moratón producido por una bala de un calibre indeterminado que, a pesar de la corta distancia que se decía había sido disparada, no había logrado atravesar la ropa del teniente.

4. El auto de juez Ramos Hermoso

Nada de esto recogió el auto que el 16 de noviembre envió el capitán Julio Ramos a la auditoría de la División en Sevilla. Por el contrario, insistió en que la contusión de Riaño se produjo a consecuencia de una emboscada perfectamente organizada: Macías, era un profesional al que se le había encargado ejercer de cebo. Un relato basado en diferentes declaraciones que, sin embargo, era puesto en duda por otras. Entre ellas las del propio coronel Varela que, como ya se ha dicho, redactó un parte, sobre lo ocurrido. Ramos recogió parte. Entre otras cosas el convencimiento del coronel de que lo ocurrido estuviera preparado. «Es una leyenda», escribió, que Macías se tirara al suelo para facilitar la agresión. Cuando él salió del lateral del convento ya estaba caído y que lo lógico era que fuera así porque se arrojaría al suelo para evitar ser herido cuando quiso cruzar el compás. Había sido la prensa, añadió Ramos, la que había creado la imagen de «un muerto que es un vivo». Tras una errónea atribución a Juan Mateo Arjona, por sus antecedentes sociales, se había comprobado que Andrés Fernando Macías García y Ambrosio García Bancalero habían sido los protagonistas. Dos días después, el miércoles 18 de noviembre, Ramos Hermosos envió un nuevo escrito al auditor Francisco Bohórquez Vecina. Ahora sobre los organizadores de la huelga revolucionaria y su relación con los incidentes del compás de santo Domingo que, insistió, estaban perfectamente preparados. La señal había sido la rotura del cable del fluido eléctrico de los tranvías. También se extendió sobre los miembros, todavía no detenidos, del CDE que no eran sino una pantalla.

En este momento el sumario había entrado en un callejón sin salida. De los detenidos y procesados permanecían en la cárcel los tres acusados –Macías García, García Bancalero y Santaella Romanceiro– de participar directamente en los disparos contra Riaño y los dirigentes cenetistas culpados de ser los directores del movimiento: Ballester, Arteché, Lucero y Alvarado. También continuaba encarcelado Mateo Arjona. En este caso por su condición de extraño en la ciudad y antecedentes de destacado sindicalista desde hacía años. Tuvieron que pasar más de quince días para que se produjeran cambios significativos. El primero fue la detención de Antonio Carrero Armario el 4 de diciembre. La efectuó Juan José González el policía mejor informado de los medios políticos-sociales del Cádiz de los años treinta. Durante los años republicanos y, después, con los golpistas a los que sirvió con idéntico celo.



Figuras 30 y 31. A la izquierda primera página del escrito de Ramos. A la derecha, declaración de Varela en la que, en el segundo párrafo, califica de leyenda que se le hubiera preparado un atentado

Carrero no tuvo ningún problema en explicar cómo se formó la CDE, quienes la había conformado, qué gestiones había realizado y cómo se había llegado a convocar la huelga general. Tampoco qué había hecho ese día. Había estado en compañía de Ballester en el local sindical, recorrido las calles para comprobar la situación y tranquilizado a su familia cuando comenzaron los tiros. Se había escondido la tarde del martes 6 cuando conoció la detención de Ballester y los demás. Sabía que de esta manera solían actuar las autoridades y no había querido caer en sus manos. Así que había cogido el tren hacia Puerto Real y se había ocultado en casa de una tía suya. Finalmente negó cualquier relación de la huelga con los tiroteos y que hubieran sido organizados por la CNT como parte de un movimiento revolucionario.

¿Por qué se entregó Carrero?, ¿sabría ya que el globo de la revolución estaba a punto de deshincharse? La policía conocía de su importante papel en el sindicato de Transportes de la CNT, del prestigio que tenía entre los trabajadores y la detención de los miembros del CDE se había convertido en una cuestión de principios. No había podido detener a ninguna de las mujeres que formaban parte de él. Es más una, Nieves Gavira, había puesto frontera gibraltareña por medio, al irse junto a una

hermana que estaba casada con un policía de la colonia. De las otras dos, como de Bonat y Galé, nada se sabía a pesar de haberse ordenado su busca y captura.

Fuera como fuese, el caso es que, aunque Ramos Hermoso procesó a Carrero, algo se estaba moviendo porque en poco tiempo el juez iba a abandonar la idea de que se había producido un intento revolucionario y la auditoría sevillana terminaría procesando sólo a los tres implicados en un supuesto delito de «insultos de palabra y obra a fuerza armada». Fue entrado ya el año 1932. Pasadas las fiestas navideñas, a fines de enero, el juez envió al auditor el auto-resumen de sus actuaciones con su propuesta de procesamientos. El largo escrito, más de 40 folios, estaba dividido en tres partes. Una primera en la que se describían los sucesos como una sucesión de enfrentamientos armados a partir de la agresión al tranvía de la calle Plocia y la rotura del tendido. Apoyándose en declaraciones, noticias de prensa y testimonios fotográficos aseguraba que los disturbios se fueron desplazando a la zona hacia otros lugares de los barrios de Santa María y la Merced hasta alcanzar los cuarteles de la Puerta de Tierra. Antes de que comenzaran los incidentes, que sorprendieron a toda la ciudad, los cenetistas más conocidos de la ciudad estuvieron en la plaza del Ayuntamiento pero se dirigieron al local sindical, situado en la otra parte de la ciudad, cuando todavía no habían comenzado. No aparecía ninguna referencia a la existencia de un complot revolucionario cenetista. Es más, Ramos se encargó de subrayar que los principales dirigentes de la CDE, aunque destacados afiliados de la CNT, actuaban al margen de ella.

En la segunda el juez dejaba identificados los lugares en donde pensaba se habían cometido delitos: el compás del convento de santo Domingo y las casas situadas frente a los cuarteles de san Roque y santa Elena. En la plaza que formaba el primero, y sus inmediaciones, se atacó a los tranvías, al tendido eléctrico y a los guardias civiles que vigilaban la zona y soldados que viajaban de protección en los coches. Además de insultarles y apedrearles, llegó a disparárseles. Una narración en la que parece que fue la Guardia Civil la que disparó primero al verse atacada con piedras y macetas y que, después, se oyeron varios tiros de pistola, hasta quince creyó oír un cabo de la Guardia Civil, procedente de los huelguistas. Narró las primeras detenciones de los manifestantes refugiados en la casa de Efectos Navales y la caída de un hombre, el alto el fuego, cómo avanzaron Varela y sus oficiales y el disparo que alcanzó al teniente Riaño. Una narración basada en el parte redactado por Varela, las declaraciones de los guardias y militares presentes, empleados de las tiendas de la zona y vecinos. La identificación del «muerto vivo» y del autor de los disparos recaía en el testimonio de Dolores de la Vega.

Respecto al tiroteo ante los cuarteles Ramos escribió que comenzó a continuación del de santo Domingo. Como si hubiera ido ascendiendo por las calles del barrio de santa María, como lo indicaban la secuencia horaria y el lugar de los heridos, hasta alcanzar la Puerta de Tierra donde se encontraban los edificios militares. Los testimonios fueron los de los soldados de guardia que aseguraron haber visto disparar desde los balcones y azoteas de las casas de enfrente. A pesar de haber indicado que fueron en gran número y que impactaron contra los muros de los cuarteles no se tomaron ni fotografías ni se hizo reconocimiento ocular ninguno de los daños producidos. Aunque sí, aseguró Ramos, que por la forma de llevarse a cabo las agresiones y los sitios estratégicos,

indudablemente escogidos apostillaba, indicaba una preparación de huelga revolucionaria. Fue la única vez que se refirió, y casi de pasada, al gran hilo argumental judicial, gubernativa y periodístico de los primeros momentos.

Referencia que desaparecería del auto tras la intervención del auditor Bohórquez que, leyó las declaraciones de los vecinos de esas casas y se dio cuenta que, más que demostrar que se había disparado desde ellas contra los cuarteles, lo que ponían de manifiesto eran los destrozos producidos por las descargas de fusilería de soldados y guardias civiles contra los edificios que llevaron el pánico al vecindario que se refugió en las habitaciones más interiores y denunciaron grandes daños en las exteriores. Como tampoco pareció en Sevilla muy adecuado que constara el agradecimiento del instructor a un suboficial, Constantino Méndez Reberdito, por la ayuda que le había prestado por su experiencia en estos asuntos ya que había estado agregado a la policía durante algún tiempo. No extraña que no consideraran las máximas autoridades judiciales militares de la División conveniente insistir ni en el carácter revolucionario de los incidentes ni en la amplitud de los tiroteos. El juez Ramos Hermoso terminaba reconociendo que no podía presentar ni pruebas, ni autores de quienes parecían haber disparado desde balcones y azoteas.

Contra los únicos que consideraba que sí había motivos para procesar era a los cenetistas del comité local detenidos, al único miembro de la CDE encarcelado, a otros dos destacados sindicalistas a los que había creído implicados en la supuesta huelga revolucionaria y los tres denunciados como autores de la agresión al teniente. Aún así, a lo largo de treinta folios, desgranó todas las diligencias que había practicado contra las tres decenas de detenidos. Empezando por Vicente Ballester, «procesado y en prisión» por considerársele uno de los dirigentes de la huelga y encontrarse haciendo planes referente a ella cuando fue detenido. Era uno de los dirigentes de la CNT gaditana y tenía contactos con la dirección regional en Sevilla. Al igual que los otros tres procesados y detenidos con él: José Lucero Ruiz, José Alvarado Quirós y Antonio Arteché Alba. De otro lado, Antonio Carrero Armario era el único miembro de la CDE encarcelado y procesado. Estaba acusado de haber llevado, por su prestigio en su gremio, al transporte gaditano a secundar el paro. Pero ya Ramos Hermoso no consideraba que estaban haciendo planes revolucionarios, ni lo demostraba la documentación incautada.

Diferente era el caso de Juan Mateo Arjona. Estaba también en prisión y procesado al creérsele que era la persona que había estado en el suelo en Santo Domingo. Claro que ya nada de esto aparecía en el escrito que se limitaba a considerar que existían indicios de que había participado en las agresiones a la Guardia Civil y por no tener «arraigo familiar» en Cádiz. El único de los procesados que estaba en libertad era Domingo Arenas Martínez. También considerado uno de los máximos dirigentes de la CNT gaditana, de su ramo de la Madera, había depositado la fianza de 3.000 pesetas que se le había exigido y puesto en libertad a mediados de noviembre.

De los tres únicos que terminaron siendo procesados y comparecieron ante el consejo de guerra, no pudo encontrársele ninguna relación con el tiroteo a Guillermo Santaella Romanceiro. Estaba procesado y continuaba encarcelado por haber sido reconocido por diversos agentes como

uno de los que levantaron husillos y cortaron las vías del tranvía en la calle Plocia. Además se consideraba sospechosa su actitud de no haber ingresado en el hospital, para el que tenía volante desde el sábado, hasta después del tiroteo de santo Domingo. Unas sospechas que confirmaban su antecedentes «extremistas». El municipal José Guerrero Ruiz decía que solía demostrar sus ideas comunistas en los bares. Como además se consideraba que no tenía «arraigo» por carecer de domicilio conocido se decidió su procesamiento.

Contra Andrés Fernando Macías García existían pruebas más consistentes. Al menos si se pensaba que su caída no había sido casual. Había reconocido ser la persona que se había tirado al suelo por miedo al verse en medio de un tiroteo. Cuando alguien se le acercó y lo levantó salió corriendo hasta su casa. Ramos relató detalladamente la actuación de Macías y cómo había llegado hasta él gracias a la aparición de la joven Dolores de la Vega. Exactamente igual que el último detenido y procesado Ambrosio García Bancalero. Al que la joven Dolores había reconocido como la persona que estaba cargando una pistola y, después, había disparado contra el grupo de militares.

Quizás todavía impresionado por lo ocurrido cuando le tomó declaración al médico comunista Juan López Giráldez, Ramos Hermoso no pudo sustraerse en dedicar un apartado de su informe a la consideración que tenía del Partido Comunista de España. Había incluido en el texto las vicisitudes de algunos de sus militantes detenidos: las de López Giraldez, Eduardo del Río Morales, Carlos Díaz Barrios y Antonio Grimaldi Gallardo. Todos ellos en libertad y no procesados. Consideraba que no podía hablarse de la existencia del partido como tal. En su opinión su jefe, López Giráldez, era un iluminado y sus escasos seguidores, «cinco o seis», «individuos de mentalidad deficientísima». El único que se escapaba a esta consideración era Grimaldi, «comunista convencido aunque pacífico», quien por su oficio, se dedicaba a la venta ambulante de dulces, a veces ante los cuarteles. Situación que podría aprovechar para realizar propaganda subversiva entre los soldados. Aseguraba que los sindicalistas, los de CNT, los despreciaban y negaban su existencia organizada. Algo con lo que estaba de acuerdo puesto que, tras interrogarlos, todos habían negado pertenecer al PCE y ser comunistas. Al parecer, escribió, les gustaba más que les llamaran de la Internacional Sindical Roja. Así que no consideraba que hubieran podido tener ninguna relación con la organización y desarrollo de la huelga. Finalmente recordaba que Clemente Galé Campos, José Ortega Bonat y Manuel Ramos Díaz estaban en busca y captura.

Ramos quiso dar una visión completa de la instrucción que ya le habían recordado desde Sevilla no iba, a diferencia de la jurisdicción civil, a decidir los procesamientos definitivos. Sería la auditoría sevillana quien lo haría finalmente. Así que junto al recorrido sumarial por detenidos, procesados y encarcelados y su visión de la realidad del PCE en la ciudad, añadió otro apartado final referente a las armas incautadas durante los sucesos. En total fueron un revólver «Smith» encontrado en un cajón de la mesa de la secretaría del Sindicato de la Construcción en la plaza García de Arboleya y un fusil «Remington» con munición. El primero, al parecer, lo había traído desde Larache Juan Mateo Arjona y el segundo le fue encontrado a un albañil quien aseguró que se lo entregaron en la Trasatlántica cuando a fines de 1929 fue reorganizado el Somatén. Ninguna de las dos armas, según atestiguó un armero, presentaba señales de haber sido utilizadas recientemente.

El 28 de enero el escrito llegó a la auditoría sevillana. Tres semanas más tarde el jurídico de la División, Francisco Clavijo, consideró que no existían cargos concretos contra la mayoría de los procesados. Sólo en el caso de Macías, García Bancalero y Santaella encontraba pruebas suficientes para ordenar su procesamiento. Así hizo a la vez que enviaba los autos al fiscal Eduardo Jiménez Quintanilla para que redactara el pertinente informe de acusación. Durante los días siguientes todos fueron puestos en libertad. Unos de forma definitiva, tras casi cinco meses de prisión, y los acusados en libertad provisional, con presentación quincenal ante el juzgado, hasta su comparecencia ante un consejo de guerra que los iba a juzgar de unos supuestos delitos de insultos de obra y palabra contra fuerza militar.

Así se cerraba un sumario que se había iniciado con la pretensión de aclarar lo que se suponía había sido un intento insurreccional en cuyo transcurso se habían producido enfrentamientos armados y un atentado contra una de las más importantes autoridades militares de la ciudad con el resultado de un herido. El globo se había pinchado. Cinco meses después otras preocupaciones llenaban las páginas de los diarios locales y nadie se ocupó de la puesta en libertad de la plana mayor del sindicalismo gaditano. Sin embargo, un paso más en el distanciamiento entre autoridades republicano-socialistas y sindicalistas, se había dado.

5. El consejo de guerra

Procesados formalmente, Macías García, García Bancalero y Santaella Romanceiro nombraron defensores. Del primero lo fue Andrés López Gálvez, el profesor de la escuela de Magisterio que hacía poco se había incorporado al cuerpo de letrados de la ciudad. Del segundo José María Pérez Halcón, un conocido abogado del momento y, finalmente, el tercero optó por un capitán de Infantería, Ángel Ramírez. Quedaba claro que los primeros contaban con la ayuda del sindicalismo local mientras que Santaella, cuya militancia y definición ideológica estaba más confusa, se acogía al que le proponían las autoridades militares.

Durante las primeras semanas de abril, los tres defensores recibieron por un máximo de cinco días la causa para su estudio. Inmediatamente López Gálvez presentó sus conclusiones provisionales en las que rechazó los hechos según estaban relatados en la instrucción y por la fiscalía. No negaba la presencia de Macías pero sí las motivaciones y consecuencias de su actuación. Decía López Gálvez que si su defendido se dirigió hacia el lugar de los hechos lo hizo por la presión del desalojo de la plaza del ayuntamiento que empujó a muchas personas hacia las calles del barrio de Santa María. Cuando llegó a él, antes de que pudiera salir por alguna de las calles laterales, le sorprendió el tiroteo. Como medida intuitiva y defensiva se tiró al suelo para protegerse. Era lo único de lo que podía

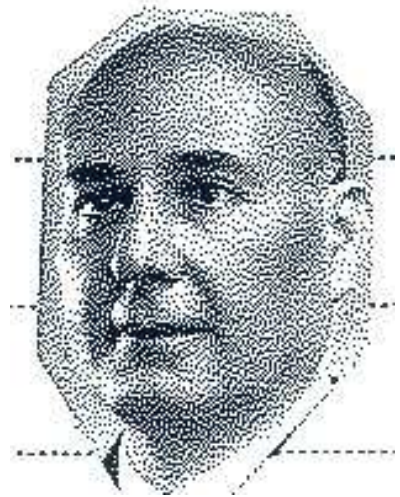


Figura 32. El abogado Andrés López Gálvez en una fotografía de los años cuarenta. Fue el más habitual defensor de los cenetistas gaditanos durante la Segunda República y el que se hizo cargo de los procesos más importantes.

acusársele y eso que había buscado y repasado en el sumario cualquier otro cargo. Sólo encontraba hipótesis, no indicios. No había ni uno que pudiera relacionar la caída de Macías con el disparo que recibió Riaño. Más aún López Gálvez reprochaba a Ramos que no le hubiera dado la relevancia oportuna a las declaraciones de Varela que consideraba una «leyenda» lo del atentado. Además estaba demostrado, por la secuencia de los hechos, que Macías ya estaba en el suelo cuando llegó el coronel. Por lo que resultaba raro que pudiera decirse que se tiró para preparar la agresión. Más aún, cuando se produjeron los disparos ya no estaba en el suelo, ni siquiera en la plaza. Al sentir que le tocaban se levantó y salió corriendo. Tampoco encontraba el defensor ninguna acusación concreta de que su defendido hubiera tenido alguna participación en la organización de la huelga, ni siquiera de que se le considerara uno de los directivos de la CNT gaditana. Así que solicitaba su absolución.

El segundo de los abogados en presentar su escrito de conclusiones fue el capitán Ramírez. También rechazó la acusación fiscal por carecer de cualquier base sólida testifical. No había testigos presenciales de que Santaella hubiera participado en los incidentes. Relacionar su no presentación en el hospital con la agresión a Riaño era excesivo. Que hubiera retrasado su ingreso hospitalario por ir a una novillada en San Fernando podía considerarse reprochable, incluso un ejemplo más del estado de abandono e inconsciencia de Santaella pero, de ninguna forma, prueba de culpabilidad. En realidad, decía el defensor Guillermo Santaella no era sino un huérfano, sin militancia política o sindical, que vivía con su hermano y sufría de la falta del control paterno.

A punto de finalizar abril llegó el escrito de conclusiones de Pérez Halcón. Tampoco aceptaba la acusación de que fuera su defendido quien hubiera disparado contra el teniente. Reconocía los esfuerzos del instructor por hallar al autor de la agresión pero no había encontrado una sola prueba de que fuera García Bancalero cuyas señas físicas, además, no coincidían con las que señalaban los testigos. Para completar sus afirmaciones solicitó que se tomara declaración a varios testigos.

Los trámites prosiguieron su curso durante el mes de mayo de 1932. Los días 23 y 24 le fueron leídos los cargos a los acusados. Los tres se mostraron disconformes con ellos. Pérez Halcón volvió a pedir que se realizara una prueba sobre la bala que se encontró entre las ropas del herido. En concreto que un perito dictaminara si era posible que dicho proyectil hubiera podido ser disparado. Por su parte el defensor de Santaella pidió la comparecencia de un guardia municipal.

Hasta julio no comenzaron a practicarse las pruebas solicitadas. En la primera los médicos militares Alejandro Rodríguez Solís y Manuel Torrecillas Carrión certificaron que, según el plano que le presentaron y las posiciones en él indicadas de García Bancalero y el grupo de militares del que formaba parte Riaño, sí era posible que el acusado hubiera podido efectuar el disparo que hirió al teniente. Ese mismo día el maestro armero del Regimiento de Costa nº 1, Joaquín González Hervía, certificó que sí, que la bala que presentó Riaño, a pesar de sus deformidades, podía haber sido disparada por una pistola de ese calibre.

Fue uno de los testigos solicitados por Pérez Halcón el que ofreció nuevos datos sobre la personalidad de Dolores de la Vega, la persona sobre la que se sustentaba el reconocimiento de García Bancalero como autor de los disparos. Vicente Franco Murga vivía en la calle Botica y había

visto también lo ocurrido. Aseguró que Bancalero no había disparado y que Dolores, que era de «mal vivir», gritaba: «¡Ahí hay un hombre muerto!, ¡cogerlo!, ¡cogerlo!». En el mismo sentido, que no hubo disparos desde donde estaba Bancalero, declararon también Arturo Ragel García y Antonio Gómez Mañez. Pérez Halcón les preguntó a los tres si conocían que, con anterioridad, su defendido había realizado actos de carácter humanitario. Los tres respondieron que sí. En los trabajos del monumento a las Cortes de 1812, en el hotel Playa y en las obras del dique, donde habían coincidido trabajando, había socorrido a varios accidentados. La estrategia del defensor estaba clara: buscaba desacreditar el testimonio de Dolores de la Vega, presentándola como una mentirosa y prostituta, y dibujar a Bancalero como un hombre incapaz de hacer daño y tan desprendido que, en octubre de 1931, actuó como había hecho con anterioridad: adelantándose para socorrer a quien parecía necesitar ayuda. Todos los resortes de la lucha judicial se ponían en marcha. Si Dolores podía parece una testigo inducida por la policía que la controlaba daba su profesión, los tres testigos de la defensa no eran vecinos que pasaban por allí casualmente. A Gómez Mañez lo consideraría la policía como uno de los «hombres de acción» más importantes de la CNT local y Vicente Franco además miembro del PCE.

Hasta octubre de 1932 continuaron tomándose declaraciones a otros testigos propuestos que no aportaron nuevos detalles que modificaran sustancialmente lo conocido. Los militares se ratificaron en sus primeras declaraciones y los testigos de Macías García se limitaron a afianzar la idea de que fue el desalojo de la plaza del ayuntamiento el que terminó por empujarle hacia el compás de santo Domingo. Así que el 19 de ese mes Julio Ramos remitió todas las actuaciones a la Auditoría en Sevilla. Bohórquez se las devolvió pidiéndole completara algunas a las que le faltaban algunos requisitos. Ramos así lo hizo y, finalmente, el 29 de marzo de 1933, Francisco Bohórquez autorizó la celebración de la vista del consejo de guerra. El fiscal Eduardo Jiménez Quintanilla consideró que en nada habían modificado las diligencias realizadas su calificación provisional y confirmó su solicitud de procesamiento de los acusados para los que pedía 6 años de prisión. La vista quedó fijada para el 29 de mayo de 1933 a las 9,30 horas en el cuartel de san Roque.

Fue presidido por el coronel Ildefonso Puigdendolas Ponce de León, jefe de las fuerzas de Seguridad de Sevilla, y como vocales formaron cinco capitanes del Regimiento de Infantería nº 27 de Cádiz: Ricardo Trabas Casas, Antonio García Barreiro, José Gurrea Pérez, Manuel González Bady y Alejandro Quesada del Pino. Como vocal ponente, es decir el militar con formación jurídica, actuó el teniente Antonio López-Fando Rodríguez. Ante ellos comparecieron el día fijado doce testigos citados por las partes. Entre ellos los médicos militares, el maestro armero y alguno de los testigos propuestos por las defensas.

La prensa le prestó poca atención. Apenas un recuadro en la local en la que se insistió en el carácter revolucionario de lo ocurrido en octubre de 1933 a la vez que felicitaba las «brillantes» intervenciones de las partes. Estaba muy reciente lo ocurrido en Casas Viejas y sus derivaciones sociales y políticas para remover un asunto que había quedado reducido a una agresión sobre cuyos detalles tampoco había que levantar demasiado la voz.



Figuras 33 y 34. A la izquierda el coronel Ildelfonso Puigdemolas. A la derecha la orden de celebración y los componentes del Consejo de Guerra

Conocemos los informes que presentaron los abogados defensores ante el tribunal. Pérez Halcón empezó afirmando que se sentía sorprendido por una causa tan extensa para un asunto tan pequeño y que, además, no veía base alguna para la acusación y posible condena de su defendido. Negó que el teniente resultara herido. En realidad lo que sufrió, basándose en el parte médico, fue un golpe. La bala encontrada ni siquiera atravesó sus ropas. Un proyectil que el juez, incumpliendo el procedimiento legal, no había unido a la causa. No hubo herida como tampoco existió agresión o insulto en su condición de fuerza armada. El coronel Varela aseguraba que el teniente Riaño le acompañaba en calidad de ayudante cuando inspeccionaba las fuerzas situadas en torno a cuartel de san Roque y a la parada del tranvía situada frente al de santa Elena. No en el lugar donde tuvieron lugar los hechos. Además no estaba declarado el estado de guerra.

García Bancalero fue detenido casi un mes más tarde cuando se encontraba sentado tranquilamente en la plaza de Mina. No había intentado ocultarse como cabría suponer que hubiera hecho si hubiera participado en el ataque y teniendo, como tenía, antecedentes penales. Fue encarcelado, incomunicado, registrado infructuosamente su domicilio y, de forma fulminante, procesado. ¿En base a qué pruebas? Se preguntó retóricamente Pérez Halcón. Por las que aparecían en las declaraciones de una prostituta conocida como «El macho» y «La Rubia» que, también, había reconocido a Bancalero. Es decir Dolores de la Vega. La única persona de todas las que declararon que vio a alguien disparar desde la zona de la droguería donde se encontraba. Las demás aseguraban que los disparos procedieron de la esquina de la calle Sopranis con santo Domingo, donde las fotos publicadas en la prensa demostraban que se produjo el mayor número de impactos de los disparos de la Guardia Civil. Pero es que, en su segunda declaración, Dolores se desdijo de la primera asegurando que había sido un conocido, Juan Tirado, quien le había dicho que el que había disparado había sido «un viejo encorvado». Tampoco era válido el acto de reconocimiento ya que no se habían cumplido las garantías mínimas y, por tanto, debía ser anulado. Como el efectuado por Juan Tirado para el que no se habían respetado las condiciones de secreto sumarial. Salvo que tuviera dotes adivinatorias no

entendía como su testimonio podía coincidir tanto con el de Dolores. No quería suponer que había existido indiscreción o mala práctica procesal.

Por el contrario podía presentar pruebas de defensa, tanto sumariales como testificales. Los informes periciales indicaban que la bala estaba deformada, como de haber sido llevada en un bolsillo, aunque no le impedía ser disparada. Pero no se encontraba en el sumario. García Bancalero se encontraba en la esquina de Botica con santo Domingo junto a otras muchas personas. De ese lugar no partió ningún disparo. Todos los presentes aseguran que se hizo desde la calle Sopranis. Justo en el lado contrario donde estaba su defendido y, por tanto, con una trayectoria de disparo imposible.

También recurrió Pérez Halcón al testimonio de José Enrique Varela y a su afirmación de que no creía que hubiera existido un atentado preparado. Dejó para el final de su intervención las declaraciones del teniente Riaño que había asegurado que podía reconocer al joven que le había disparado. Lo describió como más bien alto, sin bigote, vestido de negro y con gorra. Descripción que no coincidía con las señales fisionómicas de García Bancalero pero, tampoco, se había realizado ninguna diligencia de reconocimiento entre ambos que pudiera dilucidar las dudas. En conclusión pedía la libre absolución de su defendido.

Después expuso ante el consejo el capitán Ángel Ramírez, el defensor de Guillermo Santaella. No había encontrado nada en el sumario que pudiera relacionarlo con la acusación de insulto a fuerza armada. Ni siquiera que fuera culpable de arrojar piedras o levantar husillos. Sólo existían declaraciones indirectas. Santaella era un joven desarraigado por su orfandad, sugestionable, que prefirió ir a los toros antes que ingresar en el hospital. Hasta era posible que pudiera haber participado en los incidentes pero por su inconsciencia. No estaba sindicado ni pertenecía a ningún partido político. Se encontraba en una difícil coyuntura. Ahora no era un peligro social pero, si era condenado, podría llegar a serlo ya que se enemistaría con la sociedad y se inclinaría por el extremismo que tanto campo tenía en una Andalucía inculta y falta de justicia. Pidió, por tanto, su absolución.

Finalmente intervino Andrés López Gálvez, el defensor de Macías García, «el muerto vivo». Durante más de una hora desgranó las sensaciones que había tenido cuando recibió el encargo y tuvo en sus manos un sumario de un volumen inusitado que recogía una trágica historia. Tan interesado estaba que se entrevistó con los 14 procesados a los que pidió, exigió, informaciones veraces. Con estos elementos se encontró confuso porque parecía que existían dos realidades: la que llevaba al procesamiento de aquellas personas cuyas libertades habían sido reiteradamente denegadas y otra de la que se concluía que no había ningún motivo para ello. Perplejidad que aumentó cuando todos los procesamientos fueron anulados salvo tres. Uno de ellos, el de su defendido cuya acusación, por más que leía el sumario, no era sino que había caído al suelo y que Varela, creyéndolo muerto, ordenó cesar el fuego. Es decir que Macías, hasta para el jefe militar, hizo lo que cualquier persona haría: protegerse. Entonces ¿por qué se le había procesado y encarcelado? Pensaba que porque el

juez consideraba que la caída de Macías no había sido inocente sino que formaba parte de un complot. Pero ¿podían encontrarse rastros de tal conspiración en el sumario? Terminantemente no.

De las 20 declaraciones que se referían a Macías sólo tres eran de paisanos. Las demás eran de guardias civiles, policías, militares e, incluso, un carabinero. Todos ellos tomaron parte en los sucesos, estaban en el compás de santo Domingo y fueron capaces de sustraerse a la novelería levantada por la prensa respecto al «muerto vivo». De los civiles una era la mujer conocida como «El macho» de cuya declaración se podía colegir que la escena era: una persona tendida en el suelo, un hombre disparando y otro pidiendo la paz con un pañuelo blanco. Otro era Manuel Freire, el dueño de la tienda de efectos navales. Pidió la detención de los dos manifestantes que se refugiaron en ella y creía que Macías era un profesional por la forma en la que cayó. López Gálvez se despachó a gusto sobre qué podía entender Freire como un profesional de la caída. Incluidas referencias a su condición de gallego. Él conocía a gente que se hacía el sueco o se ponía mosca. Nada más.

Por tanto consideraba que los testimonios más fiables eran los de los militares. De ellos se desprendía que Macías cayó cuando el tiroteo era más intenso e iba cruzando la plaza sólo, rezagado de los demás huelguistas. Es lo que pensó el juez la primera vez que lo procesó. Era un huelguista más que se tiró al suelo por miedo o instinto de protección, pero no por formar parte de ningún complot. Entonces, se preguntaba, por qué no se habían procesado también a los demás que estaban en el compás. Incluidos los dos jóvenes entregados por Freire. Formar parte de un grupo no era delito. Lo sería si lo hubieran acaudillado, participado en desmanes, excitado o ejecutado algunos de los actos que caracterizaban la sedición. Pero de nada de eso se podía acusar a su defendido con el contenido del sumario. De esa misma forma pensaba Varela: no había existido ninguna confabulación contra él a pesar de lo que dijeran los periódicos que hablaban, incluso, de que el coronel concentraba el odio popular. Para López Gálvez la leyenda del «muerto vivo» era fruto de la imaginación de un periodista necesitado de colmar la voracidad de un público lleno de pánico.

Finalizó su intervención criticando la instrucción. Ni siquiera había llamado a declarar a la persona que había ido a pedir el alto el fuego y que fue detenida por el propio Varela. Si hubo complot debía formar parte de él. Macías García no formó parte de ninguna conspiración, al contrario se vio envuelto en unos sucesos de los que había procurado alejarse. Declarada la huelga estuvo por la Alameda, sitio siempre tranquilo, leyendo y charlando con algunos amigos cuyas declaraciones constan. Después se acercó a la plaza del ayuntamiento donde estaban concentrados grupos de obreros en actitud completamente pacífica. Hasta que la Guardia Civil comenzó a despejar el lugar. Macías, junto a otros muchos, cogió la calle Sopranis hasta el compás de santo Domingo donde se vio sorprendido por el tiroteo. Cayó al suelo y allí permaneció hasta que pudo levantarse y marcharse a su casa. Eso fue todo.

López Gálvez remató su intervención con un sentido llamamiento a los miembros del consejo para que absolvieran a su defendido y evitaran así que se cometiera una injusticia. Aseveración que reforzó parafraseando un pensamiento de la revolucionaria francesa Madame Roland, a su vez guillotizada: ¡acordaos de vuestro deber! El deber del tribunal era absolver a Macías García.

A continuación el consejo se retiró a deliberar en sesión secreta. Unas horas después hizo pública su sentencia: absolvía a Macías Fernández y Santaella y condenaba a tres años de prisión a García Bancalero como autor directo de actos de ofensa a fuerza armada con el agravante de haber sido condenado con anterioridad por un delito igual. Declaraba probado que el caído era Macías

García y que Ambrosio García Bancalero formaba parte del grupo que se tiroteó con las fuerzas y disparó contra el grupo de Varela. Por el contrario no consideraba probado que Santaella participara ni en los enfrentamientos de la calle Plocia ni en el tiroteo de la plaza de santo Domingo.

Existían tres tipos de responsabilidades: una primera de insulto a fuerza armada, por la agresión contra el teniente que estaba con Varela y formaba un grupo con carácter de fuerza armada ya que inspeccionaba fuerzas de servicio. La segunda era también de insulto de palabra por las frases e insultos que se dirigieron menospreciando a la fuerza. Finalmente una tercera de agresión por las pedradas y disparos que se realizaron.

De los dos primeros delitos absolvía a los tres acusados. No consideraba probado que Macías se tirara al suelo para cooperar con la agresión. Como tampoco la intervención de Santaella en los incidentes. Por el contrario consideraba probado que García Bancalero formaba parte de los grupos violentos que habían cometido actos ofensivos contra las fuerzas

armadas. Además contemplaba el agravante de reincidencia por tener dos condenas anteriores, de junio y agosto de 1927, por agresión, insulto y atentado contra fuerza armada.

García Bancalero no recurrió la sentencia pero presentó un escrito solicitando que se le computara el tiempo de prisión provisional y le fueran aplicados diversos indultos a los que creía tenía derecho. Por sus familiares -único sustento de su madre enferma y una hermana tullida- pedía que la pena que le quedara por cumplir la abonara en prisión atenuada, vigilada por la autoridad, con el fin de poder acudir al trabajo.

La autoridad judicial de la Segunda División recogió parcialmente las peticiones de Bancalero. Le aplicó un indulto de una cuarta parte de la pena pero le negó la prisión atenuada por ser reincidente. En total le quedaba 1 año, 11 meses y 4 días. Pena que la Dirección General de Prisiones decidió que cumpliera en la Prisión Reformatorio de Alicante. Hacia allí partió García Bancalero el 4 de agosto de 1933. Saldría en libertad el 4 de junio de 1935. Antes le fue denegada la aplicación de la

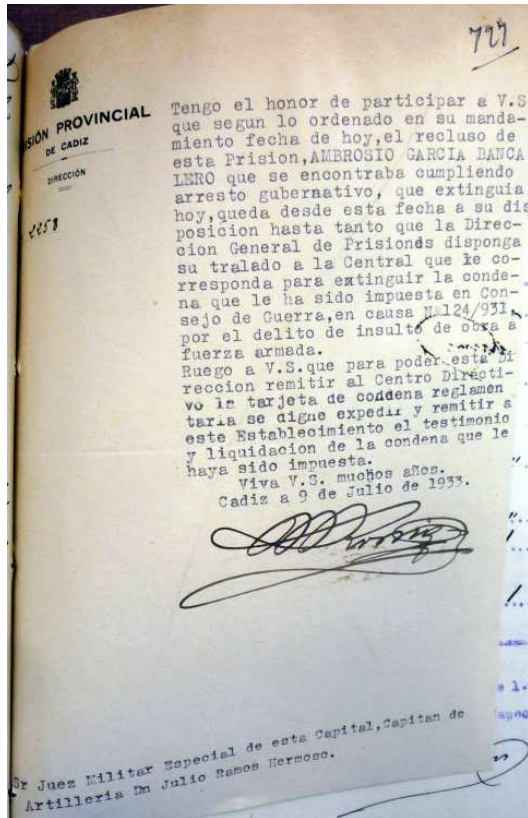


Figura 35. Notificación del director de la prisión de Cádiz al juez Ramos sobre García Bancalero, ya condenado y a la espera de que se le asignara penal de cumplimiento.

amnistía de abril de 1934 del gobierno Lerroux porque no comprendía a los condenados por hacer uso de armas de fuego contra fuerzas armadas.

De esta forma se cerraba una causa con la que se había pretendido descabezar a la CNT gaditana a los pocos meses de haberse proclamado la Segunda República. Un eslabón más de una cadena de desencuentros que terminaron por llevar al más duro enfrentamiento entre las nuevas autoridades y un importante sector de las clases populares españolas. La gran mayoría de los detenidos y procesados tuvieron un importante papel en la vida local de los años treinta. Como también los abogados, protagonistas de los sucesos y juez instructor. A muchos de ellos nos los volveremos a encontrar en julio de 1936 como objetivos prioritarios de los golpistas.

6. Los hombres de acción del anarco-sindicalismo gaditano

En uno de los pocos legajos correspondientes a la provincia de Cádiz que existen en el Centro Documental de la Memoria Histórica, procedentes de la documentación incautada por el Servicio Nacional de Recuperación de Documentos franquista, se encuentran dos folios, con membrete de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la ciudad, en la que aparece una confusa relación de nombres de aquellas personas que eran consideradas «elementos dirigentes y hombres de acción» de la CNT. Debe ser una de las que circularon aquellos meses por los centros represivos locales. En ella aparecen los considerados en 1931 los más destacados dirigentes anarcosindicalistas de la ciudad. La mayoría de ellos fueron asesinados.



Figuras 36,37 y 38. Relación elaborada en el verano de 1936 por los golpistas con los nombres de los que consideraban los más destacados anarcosindicalistas de la ciudad. El original se conserva en el Centro Documental de la Memoria de Salamanca y una copia en el Archivo General de Andalucía en Sevilla.

Fueron los casos de Vicente Ballester Tinoco, Celestino y José Alvarado Quirós, Antonio Carrero Armario y José Bonat Ortega. Otros lograron salvar la vida aunque pasaron años en prisión o viviendo escondidos. Por ejemplo José Lucero Ruiz y Félix Ortega Rúa. Otros, como Juan Mateo Arjona, que habían abandonado la ciudad, fueron asesinados en donde se encontraban. En este caso

en Ceuta junto a su hijo Juan. También los hay de los que nada sabemos. Como de Antonio Arteche Alba. De los tres procesados por los sucesos de octubre de 1931 sólo figura uno: Guillermo Santaella Romanceiro. También fue asesinado, como sus compañeros Ambrosio García Bancalero y Andrés Fernando Macías García.

Santaella fue detenido el 19 de julio y encarcelado en la prisión provincial. Allí permaneció hasta el 5 de septiembre en que fue entregado para ser, supuestamente, trasladado a la prisión de El Puerto de Santa María. Nunca llegaría. Sus restos continúan hoy desaparecidos. García Bancalero volvió a Cádiz tras cumplir la condena en Alicante. A vivir con su madre en la habitación de la calle

Rosario donde lo hacía en 1931. Logró ocultarse durante un par de meses. El 20 de septiembre de 1936, como hacía desde hacía días, *Diario de Cádiz* publicó que había sido detenido por la policía. Era una forma de avisar de que nadie escaparía a la larga mano represora. Tres días más tarde también se ordenó su traslado al penal portuense. Tampoco llegaría nunca. Su cadáver apareció junto a la plaza de Toros. El 24 fue enterrado en el cementerio de san José. Sólo quedaba vivo Macías García, el «muerto vivo» del que tanto se había hablado en su momento.

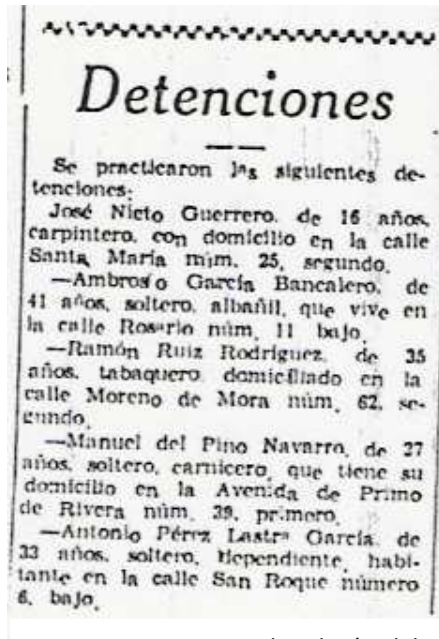


Figura 39. Noticia en la edición del 20 de septiembre de 1939 de la detención de García Bancalero.

Lo ocurrido ante la iglesia del contento de santo Domingo aquel lunes 5 de octubre de 1931 no se había olvidado. Por lo menos no lo habían olvidado los golpistas. Es más mantuvieron la leyenda que lo magnificaba. La huelga había sido revolucionaria, un auténtico ejército de pistoleros se había adueñado del centro de la ciudad y al coronel Varela le habían tendido una celada de la que milagrosamente había

salido vivo. Aunque su ayudante había sido gravemente herido. Sabemos que no es así, como lo sabía también cualquiera persona mínimamente informada en la ciudad. Pero, por razones diferentes, seguía interesando presentar aquellos sucesos como un ejemplo del caos en el que se había vivido y a sus protagonistas como las alimañas que merecían ser perseguidas hasta su completo aniquilamiento.

El publicista franquista Antonio Garrachón Cuesta no lo olvidó en 1938 cuando publicó su versión pretendidamente heroica del golpe: *De África a Cádiz y de Cádiz a la España Imperial* (Cádiz, Cerón, 1938). En la página 35 aseguraba que «el arrojo del coronel Varela pudo costarle la vida, pues un mal sujeto, que se fingió muerto, disparó contra él». Falsa descripción de lo ocurrido como falsa era la visión de los años republicanos durante los que «el agresor del coronel siguió viviendo libre y tranquilamente al amparo de una política toda ella basada en cobardía y traiciones». La única verdad que escribía Garrachón era que «con ocasión del movimiento libertador del 18 de julio pagó todos sus crímenes». Al confundir al supuesto «muerto vivo» con el agresor, García Bancalero, no sabemos si se refería a los dos pero sí tenía claro que, en cualquier caso, ambos habían sido asesinados.

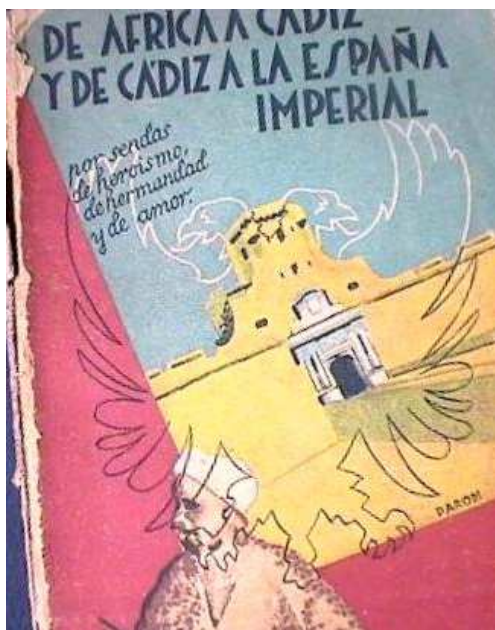


Figura 40. Portada del libro de Garrachón donde se insiste en la teoría del atentado desmentida por el propio Varela.

Andrés Fernando Macías García había nacido en La Habana y trabajaba en la factoría de la empresa CASA inaugurada hacía pocos años en Cádiz. Vivía en los actuales callejones de Cardoso llamados en aquel momento de Pi y Margall. En 1936 había pasado ya la treintena de años y había tenido una importante actividad sindical. Sobre todo en el seno de los diversos comités de apoyo que mantuvo la CNT gaditana. Precisamente cuando iba a comparecer ante el consejo de guerra era uno de los miembros del Comité Pro Víctimas de Casas Viejas encargado de canalizar la enorme oleada de solidaridad que habían levantado los afectados por la matanza de la población gaditana. Era su domicilio, ahora en la calle Libertad 9, a donde debía dirigirse la correspondencia.

En junio de ese mismo año, a los pocos días de resultar absuelto, comenzó en CASA una larga huelga. El pretexto fue el despido de un trabajador por cumplir mal con su trabajo. Sin embargo, en realidad lo que se jugaba era la supervivencia de una de las más importantes secciones de la CNT gaditana. La fábrica de montaje de la Compañía Aeronáutica era una de los principales instalaciones industriales de la ciudad y feudo cenetista desde abril de 1931. La coyuntura represiva de la primavera de 1933 pareció un buen momento para reducir su influencia. La huelga fue total y la dirección respondió con un cierre patronal. Fue en ese momento cuando, a punto de anochecer el domingo 25, fue tiroteado por un grupo de tres o cuatro personas Francisco Lozano, el director de la fábrica. El suceso ocurrió en pleno centro de la ciudad. Aunque Lozano quedó herido en una pierna, su acompañante, el director de la sucursal del banco de España en Cádiz, resultó muerto.

Inmediatamente el comité de huelga fue detenido y con él algunos de los más conocidos anarcosindicalistas locales. Se trataba del primer atentado personal que tenía lugar en la ciudad y se dispararon todas las alarmas. Entre los detenidos estuvo Macías García que aunaba su condición trabajador de CASA con la de destacado sindicalista. Nadie dudó de que había sido un atentado de carácter social. En ese sentido fue hasta noticia nacional. Sin embargo, a los pocos días el caso dio un giro por completo al detener la policía al novio de la hija del director del banco. Al parecer todo era una venganza por la oposición paterna al noviazgo. Los detenidos fueron puestos en libertad y del caso no se volvió a hablar.

Prezida Orlita se nao envia el al-
gureste manifestos:

"A todos los hombres de conciencia
libre; a todos los ciudadanos y
trabajadores, sin distinción de ideología o sexo; a la opinión pública
en general, y muy particular-
mente a la organización confede-
ral y específica de toda ciudad
[Ciudadanos] [Trabajadores] [Ca-
ñineros] Akid.

[illegible]

no, pero dar breve pero precisa explicación para que la opinión pública nos juzgue tal como merecemos serlo, pero respetando los derechos de todos. Pueden leerse en este número o por expreso pedido de distribución en esta oficina el manifiesto de la nuestra turbanía en el cumplimiento del deber que el pueblo peruano nos confiere. Este convocado hombre de declarar que, conocida así su posición, los lazos ineluctables que nos unen a la con-
da con el pueblo peruano, y a la de la Artes e Imprimir en favor de las víctimas de la represión ha sido en la ciudad alica, y teniendo a nuestro cargo la publicación de este periódico, hemos querido que el pueblo en distintas poblaciones de la provincia se hallen recibidos en la dirección provincial de casa, con el calor y el interés que corresponde a dar calor y prestar nuestra adhesión a la suscripción iniciada por el Sindicato Campesino de Paloma.

Con ello creiamo, al mismo tiem-

[illegible]

estante para sus pautas

Aspaimé

CUTAN RADICALMENTE LA
TOS

PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS
Catarras, resacas, anginas, laringitis,
bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
y todas las afecciones en general de la
garganta, bronquios y pulmones

1.4. PASTILLAS ASPAIME (1993)

[illegible]

de la organización confesional guatemalteca, los guatemaltecos **crisis** **COMISION MUJO VICTIMAS** **ORASAS VIGILAN**, que en franco **COMISION MUJO VICTIMAS** **ORASAS VIGILAN**, que en franco **COMISION MUJO VICTIMAS** **ORASAS VIGILAN**, que en franco

Y para terminar, ¿queremos hacer constar que, informados de la verdadera situación en que quedan los inocentes niños que han perdido a sus padres, los correligionarios de esta gran y hermosa institución que es el Concejo de Solidaridad hacen peticiones de sufrimiento para prohibirnos, podemos afirmar que no habíamos podido hacer nada por ellos, sino que, al contrario, los correligionarios de esta con estos niños, quienes se esfuerzan a ayudarlos pueden hacerlo, dedicándose a bien lo que, los recursos materiales de que puedan disponer por conducto de esta COMISIÓN, a fin de que los niños puedan ser económicamente a los mismos, ya que estos no podrán ser trasladados, por quedarles aún en vida unos u otros.

Como resultado, para que nadie pueda ver en nosotros egoístas reaccionarios, el primer objetivo es iniciar esta lucha, margen de la que ya nacionalmente se viene haciendo, diremos que a ello nos induce el proyecto de la organización local que el gobierno pretende utilizar para arrastrar de la tutela del Ayuntamiento a los niños que se encuentran en la colonia escolar, para lo que nos hemos propuesto de inmediato, como primer objetivo, que todos los niños que se encuentren en la colonia escolar, que nosotros llamamos dispuestos a trasladarse a esta escuela, por tanto, de nosotros mismos y vicario estamos muy satisfechos de haber conseguido este primer objetivo, por lo que estamos en modo de no haberlo conseguido, pero ya estamos dispuestos a trasladar lo posible en bien de todos los que de nosotros estamos hablando.

HAN SIDO PROCESADOS CUATRO DE
LOS DETENIDOS CON MOTIVO DE
ESTE SUCESO

Conforme decíamos en nuestra edición anterior, el Juzgado estuvo toda la tarde de ayer en la Carcel, en donde como es sabido se encuentran los detenidos a su disposición, practicando diversas diligencias, entre ellas tomar declaraciones, y efectuar careos y reconocimientos en rueda de presos.

Terminada la labor del juzgado en la Carcel, el juez señor de la Cruz, dictó autos de procesamiento y prisión sin fianza, por inducción, contra los individuos Antonio Carrero Armario, Andrés Fernández Macías, José Valifias Moreno y Ruiz García.

ofició a la Policía para la busca y detención de dos individuos, que se suponen relacionados con el atentado del domingo.

Esta mañana consiguió detener la policía a uno de ellos, llamado Manuel Ramos Díaz, domiciliado en la calle Ustariz número 3, piso segundo.

El otro sujeto que interesa el juez, es posible que haya sido detenido esta tarde.

EL ESTADO DEL SEÑOR LOZANO

Continúa mejorando de las dos heridas que le produjeron, el director de Construcciones Aeronáuticas don Francisco Lozano.

Figuras 41 y 42. A la izquierda manifiesto de la Comisión Pro Víctimas de Casas Viejas creada por la CNT a la que pertenecía Macías García. Arriba noticia de su procesamiento por el atentado contra el director de CASA que finalmente no tuvo carácter social.

[illegible]

Esta segunda detención de Macías ponía de manifiesto que para la brigada político-social que dirigía Juan José González su persona era una a las que mantener una especial vigilancia. No llegó a fin de año antes de que volviera a serlo. En esta ocasión en el transcurso de la huelga general declarada por la CNT el 12 de diciembre en solidaridad con los insurreccionados en diversos puntos del país. Fue detenido en la calle Columela formando parte de un piquete. Iba en compañía de otro sindicalista, Juan Ríos Llevano, que también desaparecería el verano de 1936. Una pareja de guardias de seguridad los detuvo y cacheó. A Ríos le encontraron en un bolsillo una pistola y 23 balas. Seis días más tarde ambos comparecían ante el Tribunal de Urgencia de la Audiencia de Cádiz. De nuevo el

defensor de Macías era Andrés López Gálvez. El fiscal retiró las acusaciones contra éste mientras que solicitó más de un año de prisión para Ríos.

De nuevo escapaba Macías García. Todavía lo haría una vez más antes del golpe de Estado. En esta ocasión por haber comprado una de las pistolas que habían sido robadas en el muelle donde estaban, enviadas desde Fernando Poo, a la consignataria de Rafael Parodi. La policía había detenido a varios cenetistas como autores del robo. Entre ellos a Celestino Alvarado y a Manuel Ramos. Fue éste último el que entregó una de ellas a Macías García. Era el otoño de 1935 y pronto iba a cambiar la situación política. Desconocemos como terminó este último sumario pero el hecho es que se encontraba en libertad en la primavera de 1936.

Aunque no tenemos ninguna referencia a su actuación durante las jornadas de julio por su trayectoria anterior seguramente estuvo en el Gobierno Civil. De allí saldría a media tarde y estaría por las calles de la ciudad hasta el día siguiente en que la resistencia disminuyó con la llegada de las tropas africanas. Como otros tantos es posible que durante los primeros días estuviera paqueando o participando en el desarme de algunos municipales y carabineros. Desde luego la policía fue a buscarlo a su casa inmediatamente pero no lo localizó. Terminó por pedir ayuda al padre de su compañera que mantenía relaciones amorosas con una matrona de San Fernando que hacía unos meses había obtenido una plaza en El Puerto de Santa María. María Ucero Guzmán acogió a Macías en su casa del número 17 de la portuense calle del doctor Palau. Allí fue detenido el 28 de noviembre y trasladado a Cádiz. Diez días más tarde su cadáver apareció en los alrededores de la plaza de Toros.

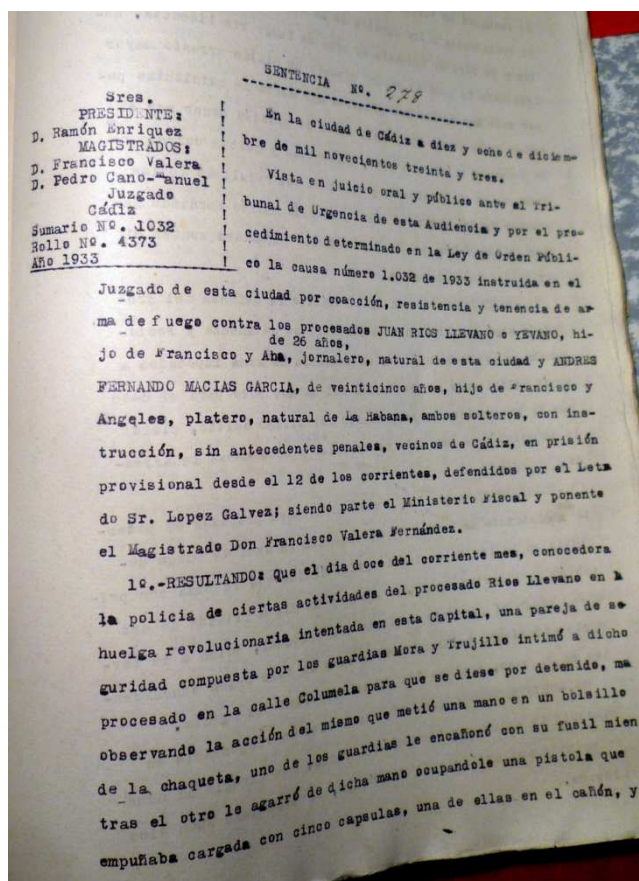


Figura 43. Sentencia del tribunal de urgencia que absolvía a Macías, a quien volvió a defender López Gálvez de su actuación en un piquete durante la huelga general de diciembre de 1933.

7. El Procedimiento Sumarísimo 245/37

Conocemos las circunstancias previas del asesinato de Macías García por el procedimiento sumarísimo que el jefe de los servicios de justicia golpista, Marcelino Rancaño, ordenó abrir el 18 de junio a Manuel Moreno Herrera con el número 245 del año 1937. Desde marzo de ese año las autoridades golpistas habían comenzado a aplicar las previsiones de justicia elaboradas en noviembre de 1936 cuando pensaban que su triunfo iba a ser total tras la ocupación de Madrid. No fue así, pero en las zonas andaluzas bajo la jurisdicción del jefe del Ejército Sur golpista se puso en marcha el control definitivo de la represión por parte de las autoridades militares. No es que hasta entonces no lo hubiera estado sino que, desde la puesta en marcha de los consejos de guerra sumarísimos de forma sistemática, los asesinatos se iban a cometer bajo una pátina de supuesta legalidad.

De hecho sus protagonistas, en el caso de Cádiz, continuaron siendo las mismas personas, salvo excepciones, que habían ocupado los puestos de la justicia militar legítima antes del 18 de julio de 1936. Por ejemplo, Cipriano Briz González que había sido el juez permanente de la plaza o el propio Marcelino Rancaño, jefe de los servicios de justicia. Por el volumen de los procedimientos abiertos, y la depuración de algunos de los instructores existentes, hubo que habilitar a fiscales y jueces civiles, de la Audiencia y Primera Instrucción, y abogados para ejercer de tales en la jurisdicción golpista. Fueron los casos además de Moreno Herrera de José Antonio Tabernilla Oliver, Alfonso Moreno Gallardo, Antonio Martínez de Salazar Moyano, José Luis Molina Schwalbach, Francisco de Paula Valera Sáinz de la Maza, Fernando Wilhelmi Castro, Francisco Alonso Moya, Francisco Casas Ochoa y Alberto Llamas García. Ellos, y otros, instruyeron los más de 450 sumarísimos antes los que comparecieron más de 1200 acusados a lo largo de 1937.

Desde enero se fueron revisando las causas abiertas hasta entonces y pidiendo informes a la Delegación de Orden Público sobre la situación de los procesados y detenidos. En el caso María Utero Guzmán las autoridades golpistas abrieron una causa, el procedimiento habitual en la justicia militar, el mismo día de su detención en El Puerto de Santa María: el 28 de noviembre de 1936. El encargado de instruirla fue Joaquín Cantero Ortega, aunque hasta finales de enero de 1937 no instruyó la primera diligencia: un oficio del gobernador militar de Cádiz, el general Luis Solans Labedán informándole de que el Delegado de Orden Público, Joaquín Escolano Mateo, le decía que la detenida

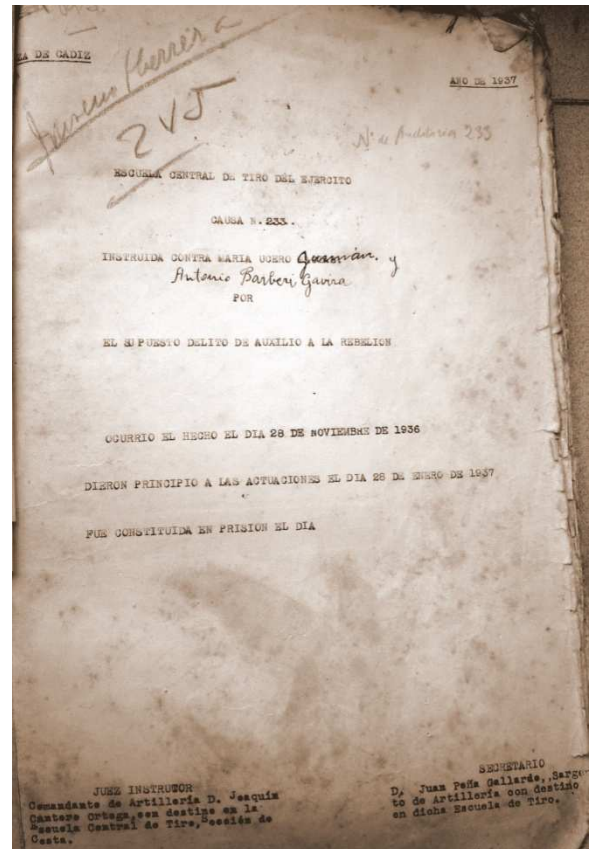


Figura 44. Portada de la Causa abierta contra la matrona de El Puerto de Santa María, María Utero Guzmán por ocultar a Andrés Fernando Marcía García.

había ayudado a esconderse a un peligroso extremista llamado «José Fernández Macías», conocido como «El Muerto Vivo», por lo que debía ser procesada. Con esta información Cantero pidió a la Comisaría de Investigación y Vigilancia que le remitiesen cuantos informes tuvieran de María Ucero y «José Fernández». Tres días después, el 4 de febrero de 1937, el jefe interino de la policía gaditana Juan José González le respondía que poco sabían de la mujer ya que no vivía en Cádiz. Sobre el hombre le aclaraba que su verdadero nombre era Andrés Fernando Macías García que era «una persona de pesima (sic) conducta tanto social como políticos (sic)» y añadía que había «fallecido por oponerse al Glorioso Movimiento Nacional salvador de España». Bien lo sabía González, el antiguo jefe de la Brigada Social de Cádiz, ya que había sido él mismo quien había encabezado el operativo que llevó a su detención.

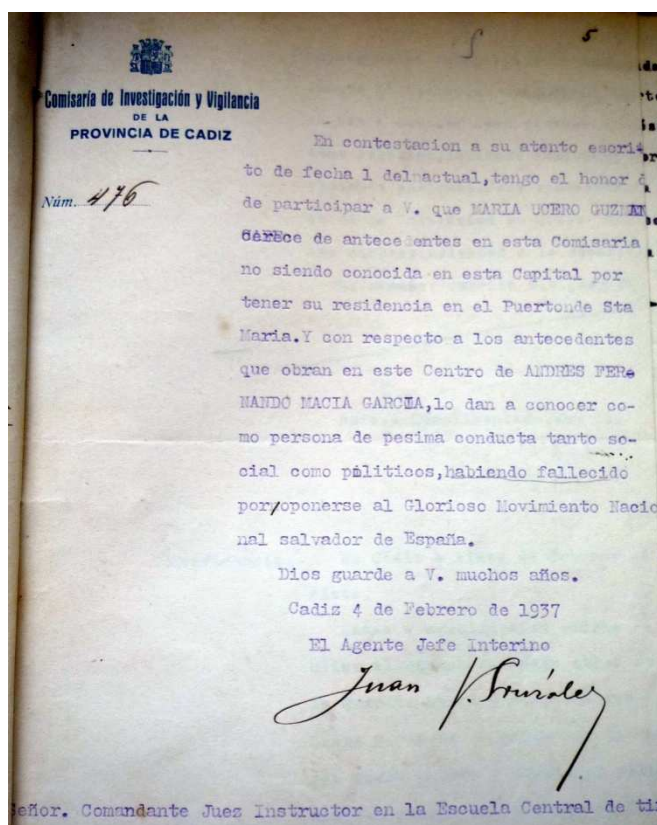


Figura 45. Oficio del jefe de policía de Cádiz, antiguo jefe de la Brigada Político Social de la ciudad durante los años republicanos comunicando el asesinato de Macías García.

los informadores no pudieron dejar de señalar que no se le conocían prácticas religiosas y que su moral era «bastante deficiente». ¿Por qué? Se refería a que Ucero llevaba dos décadas haciendo vida marital con Antonio Barberi Gavira de quien tenía dos hijos y era padre de la compañera de Andrés Fernando Macías García. Un informe que corroboró otro de la Guardia Civil de El Puerto.

Escolano no tuvo ninguna duda y propuso a Solans el procesamiento de la matrona. Entonces el instructor Cantero se puso en marcha. Ratificó los informes de los miembros de la Brigada de Información y tomó declaración a Braulio Vega Río el policía que había conducido el automóvil en el que se desplazaron los agentes que fueron a registrar la casa en donde sospechaban estaba

Aquí habría terminado la actuación del juez si María Ucero no hubiera estado viva. En otros casos, con los procesados e investigados ya asesinados, el instructor se hubiera limitado a dar cuenta a las autoridades centrales judiciales del Ejército Sur y éstas, tras acusar recibo de lo actuado, dado carpetazo al asunto. Pero Ucero no sólo estaba viva sino que además si la policía de Cádiz no la había investigado, sí lo había hecho la Brigada de Información de la Delegación de Orden Público. Dos de sus agentes, el requeté Joaquín García Rincón y el policía Antonio Rodríguez Sánchez, habían interrogado a María Ucero en la cárcel de Cádiz y considerado que se trataba de una izquierdista, simpatizante del Frente Popular, que frecuentaba el domicilio de Daniel Ortega, el médico portuense dirigente del PCE local, y que había encubierto a Macías García. Al ser mujer

escondido Macías. Sus palabras no dejan dudas sobre el interés de los golpistas por detener a quien consideraban uno de los jefes de la FAI en Cádiz. Lo estaban buscando desde julio, habían registrado en diversas ocasiones el domicilio de su novia y, por fin, habían recibido una confidencia indicándole que estaba oculto en El Puerto de Santa María. El propio Juan José González Fernández encabezó el operativo acompañado por tres agentes de policía -José Camacho Hernández, Elías Gallego García y Juan Antonio Lamet Orozco- y la intervención de varias parejas de la Guardia Civil que rodearon la casa y calles cercanas.

Cuando entraron los agentes en el patio de la casa los recibió Milagros, una hija de María, a quien preguntaron si en la casa se encontraba algún hombre. La muchacha dijo que no y los policías comenzaron a registrarla. No tuvieron que buscar mucho, en una habitación del mismo patio encontraron, acostado, a Andrés Fernando Macías que fue inmediatamente detenido. Al ver a González exclamó: «¡Tenía que ser usted el que me detuviese a mí!» Al salir, seguro de su destino, se despidió de la chiquilla a la que entregó los objetos que tenía en los bolsillos, entre ellos un mechero, una pluma y un reloj, y le pidió que le despidiese de los demás. A continuación dos de los agentes, con una de las hijas de la matrona, se dirigieron a la casa en la que se encontraba asistiendo a un parto. Cuando terminó también la detuvieron.

María Ucero y Macías no fueron trasladados a Cádiz, a la Delegación de Orden Público, en el mismo vehículo. Interrogada por el propio Escolano negó que el cenetista estuviera en su casa. Es mas ni siquiera lo conocía. Después fue ingresada en la prisión provincial. Mientras, en otro coche, Macías, preguntado por qué se había escondido, respondía que porque estaba seguro que si lo cogían lo iban a matar. Ninguno de los otros ocupantes del auto dijo nada. Poco había que decir. Todos estaban seguros de lo que iba a ocurrir. Por los registros de la entrada y salida de presos de la Prisión de Cádiz consultados por Alicia Domínguez sabemos que el mismo 28 ingresó en la prisión provincial por orden del Gobernador Civil. El 7 de diciembre figura como entregado a la fuerza de orden público para ser trasladado a la de El Puerto de Santa María. Como sabemos nunca llegaría, ese mismo día su cadáver aparecería en los alrededores de la plaza de Toros. Ahora sí que «El muerto vivo» de la derecha gaditana estaba muerto de verdad. Un paso más en la eliminación de aquellos que se consideraban peligrosos para el nuevo régimen se había dado.

María Ucero tuvo mejor suerte. Acusada de encubrimiento, alegó que había acogido a Macías por orden de quien consideraba su marido y que no sabía quién era. Que precisamente la semana del sábado de su detención había hablado con Barberi para decirle que aquella persona no podía seguir más en su casa. La policía buscó entonces a Antonio Barberi pero no lo encontró. Ni en Cádiz ni en casa de un hermano en Chiclana en donde un confidente lo situó. Hasta marzo de 1937 no fue detenido. En casa de uno de sus hijos en la calle Plocia. Barberi era un maestro de obras ya bastante mayor para la época, 77 años. Negó cualquier relación con Macías y que hubiera sido él quien lo hubiera mandado a casa de su compañera María. No sabía nada de él sólo que era novio de una de sus hijas y que se había presentado en El Puerto por su cuenta. Que cuando se enteró fue a decirle que tenía que dejar la casa. Lo que le prometió hacer pero que entonces fue detenido.

El juez quiso comprobar las dos versiones y sometió a un careo a María y Antonio. Ambos mantuvieron sus declaraciones y el juez declaró el procesamiento de ambos. Enviada la causa a Sevilla, las autoridades golpistas la devolvieron a Cádiz con la orden de que se convirtieran en un procedimiento sumarísimo de acuerdo con las instrucciones de comienzos de año. Así fue como Manuel Moreno Herrera se hizo cargo de la instrucción. Su primera actuación fue la de volver a tomar declaración a los acusados. Barberi se reafirmó en que desconocía cómo Macías había pedido asilo en casa de su compañera. María en que creía que lo había enviado éste por ser novio de una de sus hijas. En consecuencia Moreno Herrera ratificó el procesamiento y prisión de ambos.

El ocho de julio de 1937 se celebró el consejo de guerra. Lo presidió Rafael López Alba, quien compaginaba sus funciones de presidente del Consejo de Guerra Permanente golpista de Cádiz con el puesto de sub-delegado de Orden Público. El fiscal, Andrés Barea Toledano, pidió una condena de 2 años y 4 meses para María Ucero y 14 años y 8 meses para Antonio Barberi por dos delitos de rebelión militar. Su defensor, Adolfo Gutiérrez García, la absolvió. El consejo los absolvió al considerar que no estaba probado que ni Barberi hubiera enviado a Macías a casa de María ni que ésta conociera su auténtica personalidad. Desconocemos cuales fueron las causas por las que se dictó este veredicto. Con menos evidencias habían sido condenados otros encausados. Quizás los golpistas se consideraran satisfechos con la captura y asesinato de Macías. «El muerto vivo» que había nacido en octubre de 1931. De todas formas, aunque Antonio Barberi fue puesto en libertad el 2 de agosto de 1937, María Ucero fue trasladada a la prisión de El Puerto de Santa María en donde permaneció hasta el 21 de abril de 1938.

8. Fuentes y bibliografía

Fuentes documentales

Archivo Tribunal Militar Territorial Segundo, Sevilla

Causa nº 1234/31 instruida por el supuesto delito de insulto de palabra y obra a fuerza armada contra los paisanos Andrés Fernando Macías García, Ambrosio García Bancalero y Guillermo Santaella Romanceiro, Legajo 36/905.

Procedimiento Sumarísimo 245/37 contra María Ucero Guzmán y Antonio Barberi Gavira, Legajo 1.182/30.314.

Archivo Histórico Provincial de Cádiz

Sentencia 278/33 de la Causa 1032/33 contra Juan Ríos Llevano y Andrés Fernando Macías García, Fondos Judiciales Audiencia de Cádiz, Libro 4.324.

Sentencia 184 de 12.7.1935 de Causa 292/34 contra Agustín Castro Otero, Guillermo Santaella Romanceiro, Juan Montes Sánchez y Eduardo Iglesias Santamarina, Fondos Judiciales Audiencia de Cádiz, Libro 4.227.

Archivo Histórico Municipal de Cádiz

Fondo Varela, carpeta 11/300.

Fuentes hemerográficas

Diario de Cádiz, octubre-diciembre 1931 y junio-julio 1933.

El Noticiero Gaditano, octubre-diciembre 1931.

Fuentes orales

Informaciones proporcionadas por Yvonne Mateo, mayo-junio 2012.

Bibliografía

Moreno Tello, Santiago, «Un muerto que es un vivo. El atentado contra el coronel Varela en Cádiz en 1931», *Revista HADES*, nº 9 (noviembre, 2011), págs. 14-15.

Domínguez Pérez, Alicia, *El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945)*, Quorum, Cádiz, 2004.

Garrachón Cuesta, Antonio, *De África a Cádiz y de Cádiz a la España Imperial*, Cádiz, Cerón, 1938.

Gutiérrez Molina, José Luis, *Crisis burguesa y unidad obrera. El sindicalismo en Cádiz durante la Segunda República*, Madrid, Madre Tierra-Fundación Anselmo Lorenzo, 1994.

Sánchez Montoya, Francisco, *Ceuta y el Norte de África: República, guerra y represión (1931-1944)*, Ceuta, Nativola, 2004.